

**EL DILEMA MORAL ENTRE JUSTICIA Y PAZ EN EL POSCONFLICTO:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
PACÍFICA EN COLOMBIA**

ELABORADO POR:
ESTEBAN CASTRILLÓN GIRALDO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA POLÍTICA Y ARGUMENTACIÓN
PEREIRA
2020

CONTENIDO

1. Antecedentes	5
2. Planteamiento del problema	21
3. Objetivos	23
3.1 Objetivo general	
3.2 Objetivos específicos	
4. Justificación	24
5. Marco teórico	26
6. Marco conceptual	27
7. Metodología	29
8. Cronograma	29
9. Presupuesto	30
Resumen	31
Introducción	32
10. Capítulo I: etapa individual	34
11. Capítulo II: etapa de la administración pública	51
12. Capítulo III: etapa social	86
13. Conclusiones	97
14. Referencias bibliográficas	100

ANTECEDENTES

La polarización política, el bipartidismo, el abuso del poder, la distribución del ingreso, el centralismo del Gobierno Nacional o la corrupción son algunas posibles causas del conflicto armado en Colombia. En cualquier caso, la falta de cooperación y entendimiento entre la clase política colombiana ha desangrado el país desde los primeros años como República.

En consenso, el periodo histórico de Colombia denominado: “La Violencia” (1925 – 1955), constituye un precedente importante en el nacimiento de las guerrillas rurales, a causa de múltiples factores que involucra como el rápido crecimiento económico de Estados Unidos y su impacto en la economía colombiana. El sociólogo y escritor colombiano, Alfredo Molano Bravo, esbozó en su artículo Fragmentos de la Historia del Conflicto Armado (1920-2010):

(...) la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE.UU. Después de la Primera Guerra Mundial. El alza del precio del café y el crecimiento de la demanda interna desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras donde predominaban el arriendo y la colonización de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los convenios de trabajo con las haciendas y los colonos invadían tierras que pertenecían a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de ligas

campesinas jugaron un papel determinante, que en muchas regiones fue reprimido por armas oficiales o privadas.

En suma, las inconformidades de un grupo de ciudadanos, influenciados por los movimientos políticos de la época y la riqueza concentrada en un reducido sector del país, sentaron las bases de un debate que con el tiempo, se tradujo en violencia y desplazamiento forzado, haciendo cada vez más difícil la industrialización del territorio nacional, el acceso del gobierno central a las zonas rurales¹ y el debido respeto por los derechos humanos.

La incapacidad del Estado para ofrecer salud, educación, vivienda y otros servicios básicos de bienestar a los habitantes de las zonas rurales del país, ha sido la causa de una brecha cultural del mismo tamaño del conflicto interno. El analfabetismo y las condiciones de vulnerabilidad, impide que la solución de los conflictos apelen al diálogo, pues no hay suficientes herramientas cognitivas que permitan pensar al otro, como un ser sujeto de derechos fundamentales, pensante y sintiente, en capacidad de entendimiento para alcanzar un acuerdo favorable entre las partes.

Durante los años cincuenta del siglo pasado, Colombia experimentó un periodo de transición, la mayor parte de esta década fue dirigida por la dictadura militar de Rojas Pinilla, al principio apoyada por algunos importantes sectores de la política, economía y cultura colombiana, entre ellos, algunos líderes liberales y conservadores, que al ver los enfrentamientos bipartidistas del momento, apoyaron al general en el poder. A pesar de las represiones y censura propia de una

¹ Al día de hoy, el 23,15% de la población colombiana vive en las áreas rurales, conforme a las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicadas en el año 2018; en embargo, durante mediados del siglo XX, más del 50% de la población se concentraba en las zonas rurales. Este desplazamiento, entre otros motivos, fueron causados por el conflicto armado, que a través de la violencia lograron quedarse con grandes hectáreas del campesinado.

dictadura, durante su mandato, se logró el fortalecimiento de algunos renglones de la economía, entre los más importantes, el desarrollo vial del país, avanzando hacia la conexión entre las áreas urbanas, con las tradicionalmente lejanas áreas rurales del país.

Esta dictadura fue útil en la construcción de paz de Colombia, con respecto a los enfrentamientos entre liberales y conservadores, que tras décadas de masacres, alcanzaban niveles inimaginables de violencia. Fue así como, al cabo del régimen militar del general Rojas, se implementó un acuerdo de paz entre los dos movimientos políticos más fuertes de Colombia entonces, al que denominaron: Frente Nacional. El acuerdo consistía en alternarse el poder presidencial entre, únicamente liberales y conservadores, para que de esta manera, terminar sus hostilidades; sin embargo, el pacto excluía los otros movimientos políticos que estaban tomando fuerza en el país, como lo era el partido comunista de Colombia, liderado en su mayoría, por la población campesina.

Es importante anotar, que el Frente Nacional, sí logró frenar la creciente violencia que se había desatado en Colombia desde El Bogotazo, pero sembró un triste periodo aún más violento, causado el desconocimiento de otros sectores políticos, excluyéndolos y en muchas ocasiones silenciándolos a través de las fuerzas militares. La situación de polaridad política, inequidad, inseguridad y pobreza, hizo posible la injerencia de las potencias de la época (EE.UU y URSS) para enfrentarse políticamente en Colombia, en el marco de la Guerra Fría.

El nacimiento de las guerrillas en el país, se presentaron justo después del acto que dejó por fuera a las agrupaciones políticas minoritarias; la sensación de inmovilidad política cosechó los

movimientos revolucionarios de estudiantes, campesinas y comunistas, dando como resultado guerrillas revolucionarias en lugar de las guerrillas partidistas del pasado.

A comienzo de los sesenta, el Partido Comunista de Colombia, declaró la posibilidad de apelar a la lucha armada para participar en la política nacional, de la que había sido excluida por el Frente Nacional. En consecuencia, se formó un grupo de autodefensas campesinas en varios municipios alejados de las zonas urbanas, entre ellos, Marquetalia, en el departamento del Tolima; esta última, intervenida militarmente en la operación con su nombre, dadas las denuncias en el Congreso de la República de que se estaban formando “repúblicas independientes”².

Fue así como se presentaron las circunstancias para que en el año 1964, se pusiera en marcha la Operación Soberanía por parte del Ejército Nacional, quien pretendiendo regresar el orden civil al departamento del Tolima y calmar los ánimos independentistas que allí se están suscitando, se puso en marcha una confrontación militar que germinó en el fortalecimiento de las guerrillas del campesinado en defensa de su ideología política:

El gobierno de Guillermo León Valencia (1962 - 1966) comenzó a hablar de algunas Repúblicas Independientes en el territorio nacional. Marquetalia fue convertido en objetivo militar en lo que se llamó la Pacificación del Tolima. Recibieron ayuda norteamericana, ya que la Doctrina de Seguridad debía ser instaurada en América Latina para detener el avance del comunismo. Estados Unidos y León Valencia escogieron el Plan Laso para detener a Marquetalia.

² Fueron denunciados los hechos, en el año 1964, por el congresista conservador Laureano Gómez, alegando la no intervención del Estado y el riesgo de la pérdida de control de estos territorios.

Para el 24 de abril de 1964, el general Gabriel Rebéiz Pizarro daba declaraciones sobre “la Pacificación” en Marquetalia. Preocupados, el sacerdote Camilo Torres, Orlando Fals Borda, Gustavo Pérez, Eduardo Umaña Luna y Garavito Muñoz presentaron una solicitud al Ministerio de Guerra para que una misión de paz, conformada por ellos, pudiera ir a la zona y hablar con los campesinos. La solicitud fue negada.

La Operación Soberanía se inició el 18 de mayo de 1964 y terminó el 22 de junio del mismo año. Sólo hasta el 27 de mayo de 1964, 16.000 hombres de las fuerzas militares llegaban al cañón del río Atá, denominado La Floresta. Los soldados habían estado en la guerra de Vietnam, Corea y Argelia. Llevaron equipos aéreos que dejaban caer napalm y manipulaban bacterias. El ejército prometía dinero a cambio de que delataran o entregaran armas. Ningún campesino habló. En Marquetalia sólo había 48 combatientes agrarios.

(...)

Al finalizar la Operación Soberanía, los 16.000 efectivos del Estado no acabaron con los 48 combatientes campesinos. Entonces, los marquetalianos decidieron que los ancianos, niños y algunas mujeres se refugiaran en la selva. El restante de hombres y mujeres se convertirían en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 20 de junio de 1964 expiden el Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia.³

De esta manera, en el marco de la Guerra Fría, cuando Colombia representaba un estratégico aliado para la región, inició uno de los periodos más violentos de nuestra historia como

³ Recopilado el 2 de agosto del 2018, del periódico El Espectador. Fuente: <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/operacion-marquetalia-53-anos-de-un-mito-fundacional-articulo-695965>

República, los actores internacionales se nutrieron de la vulnerable estabilidad política del país, se alimentaron de la brecha económica entre los sectores rurales y urbanos, los antecedentes guerrilleros y la debilidad de las instituciones del Estado para influir de manera directa en la actividad política.

Como ya se ha mencionado, la Guerra Fría no tuvo enfrentamientos directos entre las dos potencias de la época, por el alto riesgo que representaba para la especie en general dados los avances tecnológicos, especialmente la bomba atómica; sin embargo, sí encontraron la forma de confrontarse a menor escala en Estados extranjeros, en provecho del desorden civil que en ellos se presentaba.

Durante la Operación Marquetalia (1964), las fuerzas militares incursionaron por mandato del presidente Guillermo León Valencia, durante la cual no lograron capturar a los líderes revolucionarios, que encontraron la salida al cerca militar que se había formado para su captura o asesinato. Como respuesta, se formó oficialmente la primera guerrilla –no partidista- del país: el Bloque Sur, con la redacción del Programa Agrario. Cambiando su nombre, años después (1966), a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Otras de las guerrillas revolucionarias, se formaron alternamente a la anterior durante los mismos años: Ejército de Liberación Nacional (ELN)⁴ en 1964, Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967, Movimiento 19 de abril (M-19) en 1970⁵, y otros grupos guerrilleros de menor alcance como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la década de los ochenta.

⁴ Esta guerrilla se formó inspirada en las ideas del líder revolucionario latinoamericano Che Guevara.

⁵ En el año 1970, el depuesto general Rojas Pinilla, había recuperado su derechos políticos, por lo que decidió participar en las elecciones presidenciales de entonces, enfrentándose con el conservador del Frente Nacional, Misael Pastrana; como resultado, fue elegido presidente su contendor, pese a los serios indicios de fraude en el

Los años sesenta en Colombia transcurrieron entre las inconformidades de diversos sectores poblacionales, el recrudecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el flujo de nuevas ideas revolucionarias provenientes del exterior, y especialmente, la creación de guerrillas revolucionarias que más adelante harían de Colombia, el país con mayor índice de homicidios del mundo.

Para la década de los setenta, Colombia ya era una Nación fragmentada, herida por la división física y política, amenazada por las guerrillas que mantenían su pie de lucha, sin alcanzar aún el radio de acción que lograrían en los años venideros a causa del narcotráfico. Durante estos años, su financiación provenía del secuestro y la extorción, a la que el Estado respondió militarmente, sembrando el odio que movió por muchos años las comunicaciones entre las partes del conflicto. De esta manera, el ejercicio de la política en Colombia se dio entre las urnas y las armas, esta dinámica desangró el país callando a la oposición con balas, la intolerancia se tomó el discurso político y los asesinatos se empezaron a normalizar en los medios de comunicación del país.

En lo sucesivo, las confrontaciones en el campo se generalizaron dada la capacidad militar del Estado. Fue así como se diseminó el ánimo de venganza que protagonizó el paisaje nacional, Colombia y otras naciones extranjeras empezaron a tomar partido, las fuerzas de la iglesia católica, el sector petrolero, la industria y el campesinado, se amalgamaron para dar como resultado un escenario caótico que posibilitaría el enfriamiento de las futuras negociaciones.

resultado. Este hecho, inspiró la creación del movimiento revolucionario M-19, conocido internacionalmente, entre muchos otros sucesos, por la Toma al Palacio de Justicia en los años ochenta.

Los años ochenta entraron con Julio César Turbay en la presidencia, quien se identificó por su fuerte política de gobierno frente a las guerrillas, alegando el Estatuto de Seguridad⁶, en el plano internacional, la mayoría de países de América Latina se encontraban bajo dictaduras y pese a que en Colombia aún se convocaban elecciones periódicas para los altos cargos del Estado, el modus operandi del Estado correspondía más hacia las dictaduras vecinas que las de un país democrático. En este contexto, vuelve a jugar un papel importante la Guerra Fría, pues el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido como la Escuela de las Américas, era quien adoctrinaba militarmente a los Estados, de manera que se pudiera combatir los ánimos comunistas en la región.

Paradójicamente, a finales del mandato Turbay, caracterizado por su agresiva política de gobierno, se cimentó la primera Comisión de Paz de la historia del país en 1981, compuesta principalmente por agentes del Estado, la iglesia católica y las fuerzas militares. A pesar de haber sido disuelta al año siguiente, el sucesor (Belisario Betancur) reiteró la Comisión y optó por una vía negociada para terminar el conflicto, sin embargo, se encontró con unas guerrillas más fortalecidas: mayor número de subversivos, diversificación de los frentes de ataque, y un músculo financiero solvente y creciente a causa de un fenómeno que desangraría el país en los años venideros: el narcotráfico.

El narcotráfico había ingresado al país gracias a la extensa área de cultivo, las adecuadas condiciones climáticas y la economía agricultora. Las guerrillas encontraron en este negocio una

⁶ El Estatuto de Seguridad fue promovido por el entonces presidente Turbay, durante finales de la década de los setenta en Colombia, esta legislación le concedía amplias facultades a la fuerza militar para combatir el “enemigo interno”, la cual le costó un alto precio humanitario y una mala imagen internacional, dados los sistemáticos abusos del Estado alegando este marco normativo.

oportunidad única para crecer⁷, los desmedidos ingresos a consecuencia del negocio, les permitían incrementar su radio de alcance, multiplicarse en número y expandirse a través del territorio para mejorar su cobertura.

Debido a lo anterior, cuando el gobierno nacional quiso acercarse a las guerrillas, puntualmente a las FARC, para negociar su entrega de armas, era demasiado tarde; las condiciones en las que se encontraban habían cambiado los términos en que se podían comunicar, para la década de los ochenta, el narcotráfico ya hacía parte del panorama campesino del país, la violenta persecución del Estado había exacerbado los ánimos de venganza y los veinte años que habían transcurrido, fortalecieron estratégicamente a las FARC, que ya habían celebrado varias reuniones⁸ para reflexionar sobre la manera como llegarían a usurpar el poder en un término de ocho años. Durante su última conferencia, decidieron agregar a su nombre la sigla EP (Ejército del Pueblo).

Debido al cambio de contexto, el gobierno de Belisario Betancur que había llegado a la presidencia con el eslogan de gobierno “sí se puede”, para hacer referencia a una salida negociada con las guerrillas, no logró acordar con las FARC-EP un cese de hostilidades. Empero, sí tuvo acercamiento con tres de las guerrillas del momento: FARC-EP, EPL y M19; de los cuales, solo se pudo mantener conversaciones de paz con el EPL hasta acordar un cese al fuego, pero las fisuras que tenía el proceso impidieron el resultado esperado.

⁷ Para 1982, Colombia ya era el mayor exportador de cocaína en el mundo, habiendo reemplazado la exportación de marihuana, sustituyéndola por cocaína a raíz de las ganancias que representaban esta última.

⁸ En su séptima conferencia, celebrada en el año 1982, las FARC tuvieron su mayor expansión hasta entonces, ubicando este momento como su punto de inflexión.

A partir de este momento, se encuentran las primeras condiciones para que proceso de paz sea procedente, las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) con el EPL, no alcanzaron un acuerdo debido a: la guerrilla no contaba con una concentración de tropas adecuadas para controlar las actividades que se hacían a su nombre, mientras que el Estado no tenía acceso a un mecanismo adecuado de verificación. Las conversaciones tuvieron espacio hasta el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara, a manos de narcotraficantes. Este hecho, endureció la política de gobierno, autorizó la extradición de narcotraficantes y suspendió los esfuerzos de paz.

Desde entonces, se dio formalmente inicio al periodo más violento e inhumano que ha tenido Colombia, la guerra entre el Estado y el narcotráfico, ninguna otra Nación en el mundo ha tenido que pagar un costo humanitario tan alto como Colombia a raíz del narcotráfico. Estos años comprometieron la vida de miles de colombianos ejemplares, desde magistrados, políticos, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas, militares y civiles. La guerra contra los carteles de la droga, hizo que las fuerzas armadas del país, perdieran capacidad para debilitar a las guerrillas, que aprovecharon estos años para hacer alianzas estratégicas con narcotraficantes y multiplicar, aún más, su capacidad de combate.

La Toma al Palacio de Justicia en 1985, acabó con la actitud conciliadora del gobierno y contribuyó en gran medida a la impopularidad con la que terminó la presidencia de Betancur. Sucedió por Virgilio Barco (1986 – 1990), finalmente se logró un consenso entre una de las guerrillas de entonces, M-19 y el Estado; a finales de su mandato, se logró la entrega de armas, desmovilización y reinserción a la vida civil y política de sus integrantes. Fue el primer referente

de un Acuerdo de Paz en la historia reciente, el cual contó con un post-conflicto relativamente exitoso, gran parte de sus dirigentes participaron inmediatamente en la política, hasta alcanzar diferentes alcaldías, gobernaciones y curules en el Congreso de la República. Con respecto a las FARC-EP, hubo varios avances de paz pero las condiciones mencionadas anteriormente, acompañadas del exterminio que sufrió la Unión Patriótica⁹ dificultaron las negociaciones.

Posteriormente, el liberal César Gaviria (1990 – 1994), asumió la presidencia durante un periodo verdaderamente sangriento, entendiendo rápidamente que el país necesitaba un giro político y jurídico opuesto al que venía llevando por años; este cambio radical se materializó con la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por diferentes sectores de la sociedad que dieron como resultado la actual Constitución Política de Colombia.

La vigente Carta Magna, representa el mayor esfuerzo por lograr la paz, la reconciliación y el perdón, en un país que desde temprana edad republicana ha sufrido la miseria de la guerra. Para su elaboración, se hicieron presente representantes de diversos movimientos políticos, académicos, juristas, y agentes del Estado para garantizar la verdadera construcción formal del Estado Social y Democrático de Derecho, privilegiando el respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de las comunidades indígenas y sus lenguas, la participación heterogénea de diversos movimientos políticos –acabando con el bipartidismo-, entre muchas otras novedades.

⁹ Durante 1985, las FARC-EP, quienes se encontraban en conversaciones de paz con el Gobierno de Betancur, decidió constituir su primer partido político formalmente, al que denominó Unión Patriótica; meses después, sus militantes sufrieron asesinatos en masa en manos de paramilitares, un grupo guerrillero de derecha fundado para contrarrestar la fuerza armada que se estaba presentando en las guerrillas de izquierda.

El artículo 22 de la Constitución Política, “la paz es un derecho fundamental y un deber de obligatorio cumplimiento”, con el que se obliga no solo al Presidente de la República, sino también a gobernadores y alcaldes a hacer esfuerzos para lograr dicho deber, incluso durante las elecciones locales de 1997, se adicionó una papeleta denominada “voto por la paz, la vida y la libertad”, la cual comprometía tanto a civiles como políticos a construir la paz. En este contexto, se continuaron los esfuerzos por acordar la desmovilización de las FARC-EP, como no fue posible a pesar de los acercamientos que ya se habían hecho por entonces, el Estado declaró la guerra integral contra las insurgencias.

Con la declaratoria de guerra integral, se profundizó el conflicto, se multiplicaron los asesinatos, y se incrementaron los secuestros y extorciones. Como era de esperarse, Colombia se alejaba cada vez más de la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la redistribución del ingreso. Para entonces, debido al nuevo marco jurídico, el país hacía esfuerzos por lograr su apertura económica, atraer inversión extranjera y abrir nuevos mercados, lo que presentó enormes desafíos dado el panorama actual.

Más tarde, Ernesto Samper llegaría a la presidencia (1996 – 1998), con ayuda financiera del cartel de Cali, para entonces, poderosos narcotraficantes que apoyaron al entonces candidato a cambio de negociar los procesos de extradición a Estados Unidos. Este acto de corrupción impidió que hubiera avances en la salida negociada del conflicto interno, centrando toda la atención en los procesos judiciales y diplomáticos que se adelantaban contra el presidente Samper. Durante su mandato, el abandono del Estado en la periferia del país, estimuló el crecimiento y fortalecimiento de las FARC-EP, ELN y los Paramilitares, se desató un caos y

minaron de dificultades las conversaciones de paz, que más adelante abordaría Andrés Pastrana como sucesor.

El presidente Pastrana (1998 – 2002), entendió rápidamente que la tarea más urgente a realizar como jefe de Estado, era lograr la paz con las insurgencias por el camino del diálogo. Inclusive, sin haber sido posesionado como Presidente de la República, adelantó reuniones con los jefes guerrilleros de las FARC-EP para encontrar un concilio. El proceso de paz de Andrés Pastrana, fue entonces el esfuerzo por alcanzar la paz a través de las negociaciones más ambicioso desde la presidencia de Belisario Betancur en los años ochenta, durante su gobierno se lograron importantes esfuerzos: el Plan Colombia¹⁰ (un plan Marshall para Colombia), y el Proceso de Paz del Caguán. Pese a la dedicación, las negociaciones tuvieron un estrepitoso final precisamente en San Vicente del Caguán; la imagen del Presidente de la República esperando al jefe de negociación de las FARC-EP, con una silla vacía al lado, en plena plaza pública, animaron la suspensión del diálogo.

La Zona de Distensión del Caguán, en el departamento del Caquetá, comprende en este proceso una imprudente y arriesgada decisión del Ejecutivo por lograr la paz. En el afán por llegar a un consenso, se decidió desmilitarizar una amplia zona de tierras en garantía al compromiso asumido por el gobierno, lo que causó el fortalecimiento de las FARC-EP en la zona, creciendo en número de integrantes y zonas de control. En lo sucesivo, el proceso de negociación fue desarrollándose en los mismos términos, dejando espacio a la improvisación y exposición del comisionado, ocasionando rápidamente un enfriamiento de las relaciones.

¹⁰ Se diseñó como una cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos para lograr la paz en la región, consistía básicamente en ofrecer ayuda militar a Colombia para fortalecer sus fuerzas armadas, y así lograr la rendición de los grupos subversivos, a cambio de generosas concesiones petroleras a empresas estadounidenses.

Para entonces, el Estado asumió una actitud conciliadora amalgamada con la derrota militar, necesidad que advirtió el grupo revolucionario como una debilidad del ejecutivo mientras ésta más engrosaba sus filas y multiplicaba sus ingresos; durante esta negociación las FARC-EP continuaron su expansión, sometiendo a la población civil a distintos vejámenes y tomando como rehenes a varios policías. En resumen, mientras las negociaciones representaban una posibilidad de lograr la dejación de armas y construcción de paz para el Estado, significaban un fortalecimiento militar y económico para la guerrilla. Fue necesario tres años de esfuerzo, posiblemente de terca ceguera, para que el presidente Pastrana entendiera que, a diferencia de su voluntad, no lograría la paz, pues hacía falta una característica indispensable para pactarla: la voluntad de la contraparte.

A partir del 20 de febrero del 2002¹¹, se implementaron instrucciones radicalmente opuestas a las que se venían empleando para lograr la dejación de armas de las FARC-EP: la estrategia militar. A diferencia del diálogo, la vía militar implicaba un costo humanitario enorme, en el que seguramente se vería involucrada la población civil y militar de Colombia; sin embargo, fueron estas las bases que sostuvieron el ánimo negociador del grupo subversivo en el año 2012.

El Plan Colombia nace de la necesidad de encontrar una solución inmediata a los cultivos de coca en el país, que superaban la capacidad de reacción del Estado; la estrategia consistía en la profesionalización de las fuerzas armadas colombianas por parte de instituciones estadounidenses, inyección de capital para la lucha contra el narcotráfico e intervención militar.

¹¹ Tras el estrepitoso fracaso de la mesa de negociación en plaza pública de San Vicente del Caguán, hubo varios sucesos que enfriaron las relaciones entre las partes, hasta que el 20 de febrero del 2002, el secuestro de una aeronave comercial y la toma de rehenes, entre los que se encontraba el senador Géchem, causaron oficialmente el fin de los diálogos de paz.

La economía colombiana no estaba en condiciones de asumir los costos que implicaba tal profesionalización, y menos reaccionar frente a los cultivos ilícitos y comercialización de los mismos.

Para 1999, Colombia había sufrido la peor crisis económica en décadas, el producto interno bruto (PIB) se contrajo, se frenó la inversión extranjera, y millones de colombianos entraron en la pobreza. En este punto, era inminente una intervención internacional en Colombia, pues el debilitamiento institucional junto a la difícil situación económica, favorecía el narcotráfico y el esperado golpe de Estado por parte de las insurgencias.

En breve, Colombia inició un proceso beligerante hacia la paz: la ayuda recibida por Estados Unidos convirtió al país en el tercer receptor después de Israel y Egipto; se aumentó exponencialmente el presupuesto de las fuerzas militares, se adquirieron armas, equipos, y dotación en general de los batallones, correlacionando la capacidad militar entre el Estado y las guerrillas, la cual empezó a inclinarse a favor del gobierno a principios del año 2000.

Desde la administración Clinton, Estados Unidos consideraba a las FARC-EP como un grupo terrorista internacional, enemigo de la paz a nivel mundial, al mismo nivel de AlQaeda; sin embargo, no pasaba lo mismo con la Unión Europea, por lo que el presidente Pastrana, en el giro dado a su política de gobierno procedió a explicarle al mundo las razones por las cuales había dado fin al proceso de paz, denunciando el incumplimiento de las FARC de manera deliberada y unilateral.

Así fue como el 2 de mayo del 2002, el presidente Pastrana, se dirigió a la Unión Europea por medio de su presidente José María Anzar, quien a su vez ostentaba la presidencia del Reino de España, en los siguientes términos:

Poner en duda la calidad de terroristas de las FARC, que día a día violentan y atemorizan con sus actos a la población colombiana; que tienen secuestrados cientos de personas, incluida una candidata presidencial, un gobernador en ejercicio, un ex gobernador, dos ex ministros, 5 congresistas y 12 miembros de una asamblea departamental; que han colocado carros bomba, bicicletas bomba, incluso cadáveres bomba para atacar contra la población; que dinamitan torres de energía, oleoductos y acueductos; que vuelan puentes fundamentales para la comunicación; que atacan y arrasan con pueblos enteros, sobre todo los más humildes; que han secuestrado un avión en pleno vuelo para llevarse a alguno de sus pasajeros; que extorsionan a empresarios y comerciantes; que siembran minas antipersonales que han causado la muerte o la pérdida de extremidades de niños y campesinos; que protegen y fomentan la actividad del narcotráfico, entre muchas otras viles acciones, constituye un mensaje muy doloroso, no solo para mi gobierno, sino para todo el pueblo colombiano, que sufre cada día las desastrosas consecuencias de sus acciones.¹²

La medida resultó efectiva, las FARC fueron incluidas rápidamente en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea (UE), esfuerzos que se tradujeron meses después en la decisión de Estados Unidos por extender su colaboración militar contra los grupos guerrilleros, denominado “Cambio de Autorizaciones”.

¹² SANTOS CALDERÓN, Juan Manuel. La Batalla por la Paz (2019). Pag 114. Editorial Planeta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El principal problema que surge a partir del Acuerdo de Paz (2016) es la implementación, no solo en términos jurídicos sino filosóficos. De los ejercicios reflexivos acerca del surgimiento, desarrollo y alcance de un modelo próspero para el Estado depende la construcción de paz que promete lo pactado. El estudio apela a una lectura del postconflicto holístico y de alcance regional internacional.

¿Cómo resolver el dilema moral entre justicia y paz con el Acuerdo de la Habana? Un dilema moral es un diálogo entre dos valores que da como resultado el desarrollo de habilidades cognitivas que posibilita un razonamiento moral más elaborado, útil en nuestras actividades o conductas. En el caso del ciudadano, lo pactado con las FARC-EP no plantea un verdadero cambio en su entorno ni mucho menos en su forma de pensar. Para que haya paz se necesita que tanto el Estado (el fortalecimiento de las instituciones públicas) como el individuo (en especial, el ejercicio de la ciudadanía) estén dispuestos a convivir pacíficamente en comunidad.

Ahora, en relación con el Estado, su deber de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad no es ponderable con ninguna otra obligación. Sin embargo, el conflicto armado en Colombia no solo consiste en crímenes de esa naturaleza. Por el contrario, se compone de un conjunto de elementos que conforman una unidad de violencia e inequidad. La obligación del Estado en estos casos, en sincronía con la teoría utilitarista de John Stuart Mills, es proporcionar el mayor bienestar al mayor número de personas: satisfaciendo el derecho de las víctimas a ser reparadas a

través de la verdad y garantías de no repetición. Aunado a los derechos sociales, económicos y culturales de la población no victimizada y su deber constitucional por lograr la paz.

A pesar de haberse presentado un declive de la violencia en el mundo en contraste con generaciones pasadas¹³, el conflicto armado colombiano se ha comportado a la inversa. En el proceso de transformación de las circunstancias, los dos actores (guerrilla y Estado) han ido degradando el panorama cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos: falsos positivos, secuestros, atentados terroristas, entre otros actos. El conflicto ha alcanzado tan altos niveles de tortura y masacre, que se ha llegado a celebrar la muerte de un ser humano como si se tratara de una victoria patriótica, independientemente del lado de la guerra en que se encuentre.

El postconflicto plantea un desafío para los ciudadanos, el Estado y la sociedad en general. Cada uno de los actores debe resolver el dilema entre justicia y paz de diferentes maneras, en primer lugar el desarrollo cognitivo de los individuos debe estar a la altura de las circunstancias. En simultáneo, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que se pueda formar y mantener una sociedad pacífica y por último, la sociedad en general debe convergir con las ideas de la no violencia en conjunto. Mientras no se satisfaga las necesidades que tiene el individuo, las instituciones del Estado y la sociedad en conjunto todo esfuerzo por alcanzar la paz será insuficiente.

Entender los términos por medio de los cuales el acuerdo de paz resuelve los dilemas morales que plantea el conflicto armado en el país, es clave para una mejor comprensión de la importancia histórica de lo pactado. Concomitante a la experiencia de la guerra, se fue

¹³ Pinker, Steven (2011), *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. New York: Viking Press.

fortaleciendo la tendencia de normalizar la crueldad, en parte dado desarrollo económico que experimentan algunos sectores de la industria, pues el sistema que opera en Colombia privilegia la crisis económica por encima del orden social o político. En síntesis, el esfuerzo por construir una paz a partir de los acuerdos planteados en el gobierno Santos, es directamente proporcional a las dimensiones del conflicto. El dilema moral que enfrenta las nuevas generaciones, definitivamente es entre la paz y la justicia.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Plantear un análisis filosófico acerca del dilema moral entre justicia y paz que debe resolver la sociedad colombiana durante la implementación del Acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar el dilema moral al que se enfrenta el ciudadano colombiano durante la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano (2016)
2. Señalar los mecanismos que el Acuerdo de Paz (2016) propone para resolver el dilema moral entre justicia y paz desde la Administración Pública.
3. Plantear la naturaleza del cambio como concepto clave para resolver el dilema moral entre justicia y paz por parte de la sociedad colombiana durante el postconflicto.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación desarrolla un estudio holístico del proceso de paz al abordar no solo lo acordado en la Habana sino también las condiciones que hacen falta para que la sociedad colombiana viva sin violencia. La reflexión filosófica de los dilemas morales que aún convergen en el panorama político actual de Colombia y el compromiso ciudadano, del Estado y la comunidad tiene con la transformación ideológica de la sociedad. En resumen, el trabajo de investigación pretende coadyuvar a la implementación del Acuerdo de Paz colombiano (2016) desde un enfoque filosófico, reconociendo la especial importancia que la labor jurídica representa para la resolución del conflicto interno pero la necesidad imperiosa de acompañar esta gestión con un trabajo académico que posibilite el cambio.

Los acuerdos de paz en el mundo han logrado poner fin a conflictos que durante las controversias parecerían imposibles, lo que implica un logro enriquecedor para la condición humana. Un proceso de negociación en que se intenta acodar de manera dialógica un cese de hostilidades entre actores que han estado intentando derrotar militarmente al otro es una hazaña que involucra una las mayores virtudes que puede alcanzar el ser humano: el respeto, la compasión y sobretodo, la tolerancia.

En Colombia, los esfuerzos por alcanzar una paz consensuada ha marcado nuestra historia republicana: el tratado de Wisconsin, el acuerdo de Benidorm, el acuerdo de paz con el M19 o acuerdo de Justicia y Paz con los paramilitares; Sin embargo, ninguno de los anteriores ha

tratado un conflicto tan prolongado como el acordado con las FARC-EP en el 2016. Ahí, el desafío que plantea el postconflicto.

En síntesis, todos los acuerdos que se han firmado en Colombia han logrado consensos en medio de las diferencias más profundas que plantea nuestra realidad colombiana. En el caso de lo negociado en la ciudad española de Benidorm (1957), puso fin al periodo que los historiadores denominaron: La Violencia bipartidista, negociación que para entonces parecía imposible; El acuerdo con el M19, no solo logro detener un movimiento guerrillero (autor material de una de las mayores tragedias de la historia colombiana: La Toma al Palacio de Justicia), sino reconocer que sus reclamos frente a la participación política de otras ideologías diferentes a las del Frente Nacional eran posibles. El acuerdo de Justicia y Paz, entre otras cosas, fue el precedente político para iniciar la negociación con las FARC-EP.

Pese a haber logrado desmovilizar la guerrilla más antigua del mundo, con uno de los músculos financieros más fuertes a nivel mundial, el acuerdo suscita discusiones tanto políticas como jurídicas. En primer lugar, la semilla del debate se presenta en la compatibilidad entre la justicia transicional que propone lo pactado en La Habana y los derechos a las víctimas. En segundo lugar, florecen discusiones acerca de diversos temas como la tenencia de la tierra y el despojo dado durante el conflicto, delitos de género y la reincidencia. Sin embargo, el acuerdo no plantea ninguna estrategia para que los ciudadanos se inserten en una nueva sociedad (hacer la transición entre una sociedad violenta a una pacífica) y mucho menos para que aprendan a vivir en comunidad.

El estado actual del conocimiento acerca de los dilemas morales en sociedades en conflicto, ha sido abordado en la filosofía política desde diversas perspectivas; John Gray, por ejemplo, ha señalado en *Las Dos Caras del Liberalismo* (2001), que el origen de los juicios de valor se encuentran en lo que denomina: *el modus vivendi*. Por lo tanto, para que sea posible una paz estable y duradera como promete el Acuerdo de la Habana se necesita abordar al ciudadano como un actor fundamental del conflicto y después, cómo este convive en comunidad.

MARCO TEÓRICO

Los dilemas morales consisten en conflictos de valores que en esencia no tendrían por qué cuestionar sobre qué es bueno, pues excluyen de por sí, cualquier incertidumbre al respecto. Sin embargo, bienes universales como la justicia y la paz exigen a menudo, demandas incompatibles entre ellas. Cuando esto ocurre, se da como resultado: la guerra o la injusticia, entre las cuales no hay ninguna prioridad.

Las necesidades inmediatas de la paz suponen una mayor urgencia frente a la justicia, lo cual no debe haber lugar a las discrepancias entre lo bueno y lo correcto, ni mucho menos la manera como se van a priorizar las exigencias particulares. Frente a las sociedades en conflicto, la contradicción en sus juicios sobre los principios de justicia hace parte de las interpretaciones de su historia compartida y sus intereses particulares.

En palabras de John Gray (2001): cuando las comunidades luchan por el poder sobre recursos escasos, tienden a intentar justificar sus intereses rivales con argumentos de justicia. Donde los

intereses están en conflicto y el poder político está en juego, los principios compartidos de la justicia dictarán probablemente juicios incompatibles sobre las exigencias de la justicia.

Los dilemas parten de una contradicción, que en el caso de la justicia plantea demandas incompatibles. Cuando es necesario resolver injusticias hechas hacia otras comunidades en el pasado, derivadas de la espiral de violencia, puede resultar desventajoso para las comunidades actuales. Lo anterior no significa que aquella justicia sea imperfecta, sino todo lo contrario, hace parte de la justicia aplicada a valores en conflicto.

Una justicia que cuente con aceptación universal plantearía demandas en conflicto, las cuales posiblemente resulten razonables dado que provienen de diferentes **modos de vida**: son todas las posibilidades de resolver conflictos entre valores universales discordantes; En otras palabras, es la manifestación de la verdad que las personas adoptan para vivir diferente.

MARCO CONCEPTUAL

En concreto, los dilemas entre la justicia y la paz surgen las diversas formas en que los humanos pueden vivir bien. Precisamente parte de concepciones contradictorias de ese bienestar, tan variadas como los diferentes modos de vida (fuente de conflictos entre valores sin ninguna solución correcta). Así, sería correcto suponer que no existe un modo de vida ideal, ni mucho menos un juicio de valor perfecto.

Entonces, ¿es posible plantear un análisis filosófico moral que pueda satisfacer plenamente las exigencias de todos? No, por supuesto. Sin embargo, existen algunas virtudes que por su universalidad, posibilitan a todas las formas de vida las condiciones necesarias para el bienestar humano.

Los conflictos de valores son propios del ser humano y sus necesidades, que plantean demandas en conflicto. Necesidades que nunca podrían ser satisfechas dados las diversas formas de vida de donde provienen, que a menudo, son incompatibles por naturaleza. De ahí que la idea de perfección en la vida humana no tenga ningún significado. Cuando los modos de vida son tan diferentes, resulta improcedente estudiar las pérdidas o las ganancias, pues lo que para unos es favorable, para otras puede ser completamente lo contrario. Las formas de vida no son antagónicas sino alternativas, y como consecuencia, la preferencia entre una sobre la otra no tienen ninguna connotación negativa, es un hecho establecido, que aunque diferentes, no son independientes.

Para el caso colombiano, cuando se discierne acerca del contenido del Acuerdo de Paz, realmente se difiere sobre la concepción del bien. Es un diálogo que parte desde los diferentes modos de vida y la manera como se entienden los derechos que corresponden, que rivalizan con el entendimiento de los otros, que pueden resultar igualmente legítimos. En relación a la justicia, es un valor que se encuentra ampliamente configurado por las convenciones de la sociedad, razón por la cual es tan variable. Cuando hay muchos modos de vida que compone una sociedad, resulta esperable el cambio al reflejar las creencias morales.

En cualquiera de los casos, todos los modos de vida comparten intereses comunes que proporcionan una coexistencia pacífica, en la medida que así se satisfacen los intereses humanos, como colectivo. Las formas de razonamiento ético corresponden a capacidades que los agentes humanos ya tienen independientemente de sus paradigmas.

En conclusión, por muy diferentes que sean los modos de vida de una sociedad como la colombiana, todos deben apelar a valores universales que posibiliten la convivencia armoniosa entre ellas, identificando un interés en común: la tolerancia.

METODOLOGÍA

La metodología será descriptiva e interpretativa, dado que se estudiarán los recientes hechos histórico político de Colombia con un enfoque histórico-filosófico, principalmente expuesto por: John Gray, Lawrence Kohlberg, Hans Georg Gadamer y Steven Pinker; construyendo de esta manera un argumento a favor de un proceso de paz holístico, fundado en una formación ética y filosófica de la población que permita una mirada crítica de la política.

CRONOGRAMA

Año	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Mes	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Delimitación del tema													
Consulta bibliográfica													
Formulación													

de los objetivos													
Elaboración del anteproyecto													
Asesoría de investigación													
Recolección de información													
Análisis de la información													
Interpretación de los registros													
Correcciones finales													
Entrega del trabajo final													

PRESUPUESTO

RUBRO	VALOR
Papelería, fotocopias y demás	\$400.000,00
Transporte	\$600.000,00
Alimentación	\$400.000,00
Impresión de anteproyecto y trabajo de grado	\$150.000,00
Libros y materiales de investigación	\$1.500.000,00

RESUMEN

La presente investigación plantea el Acuerdo de Paz colombiano (2016) como uno de los instrumentos necesarios para que la sociedad en general pueda transitar de una convivencia violenta a una pacífica. En suma, lo pactado hace énfasis en las responsabilidades que tiene el Estado y la otrora guerrilla con la construcción de paz, pero no hace referencia al trabajo individual que debe realizar el ciudadano para insertarse en una nueva sociedad. Tampoco aborda el compromiso de la comunidad en general y la manera como debe asumir esta transición hacia la vida pacífica.

En primera instancia, se desarrolla la manera como el miembro de la sociedad debe abordar el dilema moral entre justicia y paz durante el postconflicto. Igualmente presenta el desarrollo cognitivo como una condición *sine qua non* para que haya una Colombia en paz. Después, se exponen los instrumentos y compromisos que adquirió el Estado colombiano con la firma del acuerdo en mención y la manera como estas resuelven el dilema entre justicia y paz.

Para terminar, se presenta la manera como la sociedad puede transitar hacia una sociedad no violenta habiendo agotado las etapas anteriores (desarrollo individual y fortalecimiento institucional). Es decir, la lectura filosófica del cambio de paradigma que ofrece la justicia transicional en Colombia: replantea el valor de justicia y paz para adaptarlo a las circunstancias.

INTRODUCCIÓN

La violencia ha disminuido en el mundo. Según Steven Pinker (2011), nos encontramos posiblemente en el periodo histórico más pacífico de nuestra humanidad, cifras como la expectativa de vida, las penas de muerte y los enfrentamientos militares son menores en comparación con tiempos pasados. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos humanos como medida universal para calificarnos como especie sigue presentando enormes desafíos en todo el mundo.

Es un hecho notorio que dar por terminado un conflicto armado tan prolongado en el tiempo como el colombiano resultad difícil. La modalidad de la guerra ha cambiado significativamente: las pretensiones, su financiamiento y *modus operandi*. En cumplimiento de nuestra obligación constitucional y humana con la paz, resulta indispensable reflexionar acerca de los derechos de las víctimas de manera que posibilite una paz negociada, evitando que la condición de víctima se multiplique indefinidamente.

La presente investigación propone una lectura holística del proceso de paz al plantear la necesidad de involucrar el resto de actores de la sociedad, a pesar de no ser considerada por la justicia transicional como víctimas o victimarios. En este sentido, se presenta al ciudadano y cómo se inserta en la vida en comunidad como una parte clave en el cambio de paradigma que pretende lograr lo pactado en la Habana.

La metodología será descriptiva e interpretativa, dado que se estudiarán los recientes hechos histórico político de Colombia con un enfoque en la filosofía moral consignados en: textos académicos, relatos periodísticos cercanos al proceso de negociación colombiano y los testimonios que han brindado los protagonistas del proceso de paz, entre otros documentos relacionados con la construcción de paz del pueblo colombiano.

CAPÍTULO I:

ETAPA INDIVIDUAL: LA RESPUESTA CIUDADANA AL DILEMA ENTRE JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA

La sociedad civil cambia constantemente, en especial si está inmersa en una guerra civil. De acuerdo con Rodrigo Uprimny (2014): "ha cambiado la guerra, pero además ha cambiado la forma de hacer la paz". Pese a las numerosas guerras civiles que se han desarrollado en Colombia desde su edad temprana independiente, el conflicto que enfrenta con las guerrillas desde hace más de 50 años ha sido el más significativo. El Acuerdo de Paz del 2016, representa una nueva esperanza de reconciliación para la sociedad en general y un futuro prometedor en términos económicos, sociales y políticos.

Sin embargo, el proceso para alcanzar la paz es un esfuerzo de largo aliento que implica desafíos tanto presentes como futuros. Como primera medida, se ideó un modelo de administración de justicia que desplaza la jurisdicción penal ordinaria en el juicio de los crímenes cometidos durante la guerra y se introdujo el concepto de Justicia Transicional, que recupera los logros alcanzados en países que superaron guerras civiles atroces como la colombiana, enjuiciando con celeridad a los mayores responsables sin colapsar el sistema de judicial

Ahora, para implementar esta novedad en el sistema judicial del país es urgente contar con el entendimiento social generalizado de las garantías que se ofrecen y el costo humano que implica renunciar al esto; en consecuencia, el proceso de post-conflicto involucra importantes retos en las capacidades cognitivas de su población, en particular, su desarrollo moral.

Para efectos del presente trabajo, se entenderá como sociedad pacífica al colectivo de personas que se oponen ideológicamente a resolver sus diferencias por medio de acciones violentas; así mismo, se entenderá por desarrollo moral las estructuras cognitivas que determinan las maneras de reunir y procesar información por parte del sujeto.¹⁴

Lo anterior con el objetivo de analizar ¿En qué medida la formación moral del ciudadano influye en su compromiso con la construcción de una sociedad pacífica? Y desarrollar la hipótesis que la formación moral del ciudadano determina en una medida significativa su entendimiento de solidaridad y empatía.

LOS DILEMAS DE LA PAZ

El desarrollo cognitivo de un individuo varía conforme la familia, la cultura y su experiencia como ser independiente. Ahora, con relación a la educación moral también se compone de dos etapas, en palabras de Kohlberg (1984): heterónoma y autónoma; el enfoque del autor, expuesto en seis escenarios, plantea que la moralidad no pertenece exclusivamente a procesos inconscientes o de aprendizajes tempranos sino que hay algunos valores con carácter universal que surgen como resultado de un juicio racional maduro.

El juicio moral es un proceso reflexivo que realiza un individuo acompañado de sus recursos cognoscitivos y la jerarquía de valores que haya conformado hasta entonces. Al exponerse a un conflicto de valores o dilemas morales, el individuo emplea esa jerarquía lógica construida

¹⁴ Linde, A. La educación Moral según Lawrence Kohlberg: una utopía realizable, p.11

durante sus etapas de aprendizaje para poder enfrentar las contradicciones que se presenten; de modo que la respuesta a los dilemas morales es tan variada como los procesos de pensamientos O'Connor (1977): “implica diferentes formas de pensar, ordenada de manera invariable y conformando en una unidad de creencias que hacen parte del pensamiento”.

En particular, para el caso colombiano se refiere a la herencia colonial española, especialmente, a la administración que la Iglesia católica hizo de la educación durante casi ciento cincuenta años después de la independencia mediante Concordatos como lo desarrolla Melo (2017). Así, dictando la jerarquía de valores y vigilando la forma de pensar de la población. Entonces, ¿Por qué es importante la formación moral en la construcción de una sociedad pacífica?

Para Kohlberg (1984), el estado de desarrollo moral corresponde a la estructura de razonamiento del sujeto, y no en un contenido específico. Es decir, son las diferentes perspectivas “con relación al sujeto, las normas y las expectativas de la sociedad”. En suma, cada caso se define conforme a un conjunto de valores y razones para ofrecer apoyo a determinada circunstancia. En otras palabras, el entorno y sus demandas guían el comportamiento desde la etapa infantil hasta el ejercicio de la ciudadanía.

Con respecto a los niveles de moralidad: en primer lugar se encuentra el pre-convencional, donde el punto de partida son las necesidades propias (propio de los niños, algunos adolescentes y aún de otros adultos); en segundo lugar, el nivel convencional, que se presenta cuando el sujeto actúa consciente de ser miembro de una sociedad o grupo, buscando de esta manera la decisión más beneficiosa para el colectivo (inicia en la adolescencia y permanece en la vida adulta de algunos

individuos); por último tiene lugar el post-convencional, desde una perspectiva más global, defiende los intereses que deben reglamentar las reglas sociales, independiente de los grupos a los que pertenezcan (caracteriza a una minoría de adultos).

Ahora, el desarrollo moral para Kohlberg (1984) comprende seis estadios, iniciando por la modalidad heterónoma: caracterizado por un ser egocéntrico a quien no le interesa el bienestar de los otros y actúa exclusivamente para evitar un castigo; el individualismo con fines instrumentales; expectativas interpersonales mutuas; sistema social y consciencia, actuando conforme las obligaciones como miembro de una sociedad; contrato social, individual y derechos individuales, con un sentido de obligación de la ley; y por último, siendo el estadio más elevado, actuando según los principios éticos universales: asumiendo un compromiso real con los fines en sí mismo del ser humano.

Entre los dilemas que propuso en sus experimentos se encontraba el denominada “Dilema de Heinz”:

En Europa una mujer estaba a punto de morir de un extraño cáncer. Había una medicina que los médicos creyeron que podría salvarla, una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad había descubierto recientemente. El farmacéutico cobraba 2.000 dólares, diez veces más de lo que había costado prepararla. El marido de la enfermera Heinz, acudió a todo el que conocía para pedir dinero prestado, pero solo pudo conseguir la mitad de lo que la medicina costaba. Dijo al farmacéutico que su esposa estaba muriendo y le rogó que se la vendiera más barata o que se la dejara pagar más tarde. Pero el farmacéutico

dijo que no. Así que Heinz desesperado robó la medicina de la farmacia para dársela a su esposa. ¿Tenía el marido que haber hecho eso? ¿por qué?¹⁵

Kohlberg, L. (1984)

Independientemente del dilema moral presentado, las reflexiones morales de un individuo se hallan en un mismo estadio, y comprende únicamente los argumentos que pertenecen al suyo, pese algunos casos donde se alcanza un estadio superior al que se encuentra.

Para alcanzar un estadio superior de moralidad es necesario un conflicto cognitivo causado por contradicciones espontáneas del sujeto o por acontecimientos externos. De acuerdo con Turiel (2016): la persona comprende la realidad social conforme a sus capacidades de asimilación, cuando alguna situación problematiza su entendimiento se ve obligado a integrar esa perturbación en su proceso cognitivo, ocasionando una maduración de razonamiento que transita entre un estadio moral a otro superior.

Ese ejercicio que estimula el desarrollo cognitivo del sujeto es necesario para el aprendizaje moral, sin ser suficiente. Es posible que el estadio cognitivo no corresponda a su estadio moral, donde suma importancia el factor social, la interacción con otros y la capacidad de asumir roles con diferentes perspectivas. En resumen, pese a no haber ningún factor decisivo en el desarrollo moral, las condiciones culturales que rodean al actor marcan el ritmo de tránsito entre un estadio moral a otro.

¹⁵ MEDINA-VICENT, M. The Ethics of Care and Carol Gilligan: a Critique of Kohlberg's Theory of Moral Development of the Definition of a Postconventional Contextualist Moral Level. Revista Internacional de Filosofía, No. 67, 2016, p 86

LA OPOSICIÓN FEMINISTA AL UNIVERSALISMO DE KOHLBERG

El pensamiento de Carol Gilligan cuestiona la teoría universalista de la evolución de la moralidad humana dado que excluye las desigualdades sociales que se da entre géneros y grupos sociales. En principio, Gilligan (1982) alega que la teoría perpetua las desigualdades, ignorando las particularidades de género: “adoptando implícitamente la vida del varón como norma, tratando de crear a mujeres a base de un patrón masculino”¹⁶ considerando indispensable valorar el rol que la mujer asumía en la sociedad en los años cincuenta que se realizaron los estudios. Es decir, criticando a Kohlberg el no haber teniendo en cuenta la dominación patriarcal y las estructuras sociales de exclusión sexo-género de la época de sus experimentos, pues habría cambiado significativamente los resultados, según Gilligan, (1982) entender que las experiencias concretas de los sujetos condicionan sus razonamientos morales. En resumen, propone una teoría denominada “ética del cuidado” que no responde a diferencias biológicas entre hombres y mujeres sino a una distinta socialización.

En respuesta a lo anterior, el resultado de desarrollo moral otorgado por Kohlberg a las mujeres sí involucra el rol que ellas asumían en la sociedad para la época, pues de haber sido otro, quienes participaron habrían obtenido un puntaje diferente. La responsabilidad de los resultados no corresponde a la teoría de Kohlberg sino a circunstancia ajenas a su voluntad, como el papel subyugado que tenía la mujer en la vida en general. En caso de haber mujeres en condiciones

¹⁶ Gilligan, C. La Moral y la Teoría. Psicología del desarrollo femenino. México, Fondo de la Cultura Económica, 1985, p.21

sociales similares a los hombres que obtuvieron el mayor estadio de desarrollo moral en la época, también habría resultado favorecidas con la teoría de Kohlberg.

De manera que, la teoría de Kohlberg ignora de alguna manera la posición de la mujer en los años cincuenta es desacertada en la medida que, como la misma autora indica, se debe a condiciones sociales que con el tiempo fueron mejorados. En este contexto, la formación ética reviste una importancia significativa dado que posibilita al sujeto, en caso de presentarse un dilema moral, que pueda considerar todos los elementos que lo componen y emitir un juicio de valor mesurado, responsable y solidario. Virtudes indispensables en la construcción de una sociedad pacífica.

Tal como lo expone Kohlberg, la formación ética es un ejercicio lineal y jerarquizado que se construye con la participación en diferentes círculos sociales. En una sociedad acostumbrada a la inequidad labrada por la guerra, la socialización se ve marcada por este fenómeno y, en consecuencia, los estadios de desarrollo moral. Por lo tanto, transformar una sociedad en conflicto no solo requiere una implementación jurídica y económica de la paz sino también una mediación social.

La oposición a la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, parte de un supuesto concentrado en un solo sector del conflicto. Quienes simpatizan con la idea de buscar la paz a través de la fuerza armada no contemplan el costo humano que esa decisión implicaría o, por al menos, les parece irrelevante. Según su estadio de desarrollo moral, su perspectiva acerca del valor de la vida se ve limitada por sus habilidades cognitivas que cubren con un velo de

ignorancia las dinámicas sociales que componen, en este caso, la política nacional.

Para implementar un sistema transicional como lo demanda la realidad política de Colombia es indispensable que la sociedad civil logre redefinir el concepto de justicia. Sin el apoyo popular de las mayorías la jurisdicción especial se mina de dificultades que amenazan con la estabilidad prometida. Para lo cual la teoría de desarrollo moral de Kohlberg proporciona poderosas herramientas para edificar un postconflicto establece, pacífico y duradero.

Pese a la importancia que revisten las estrategias jurídicas y económicas del acuerdo de paz en estudio, este carece de herramientas que adapten al pueblo a la nueva realidad que plantea. Si bien es cierto que uno de los orígenes del conflicto ha sido la concentración de la tierra o la falta de presencia del Estado en lo que algunos han denominado la "Colombia profunda", las competencias blandas de la población también juegan un papel protagónico.

Una sociedad que no diferencia entre el bien general y los intereses particulares está condenada a la guerra, sin importar qué estrategias se emplean para evitarlo. Es por esto que la piedra angular del postconflicto debe ser la capacitación ética de la población. Es a partir del desarrollo moral de los individuos donde se debe cimentar la Justicia Especial para la Paz pues garantizaría que los esfuerzos legislativos y presupuestales se sostengan en el tiempo.

El problema real no es la desigualdad ni la falta de autoridades estatales en las zonas rurales del país sino el comportamiento de las masas. De hecho, capacitando a los ciudadanos para una toma de decisión responsable con su

entorno y con ellos mismos, no sería necesaria la constante vigilancia del Estado ni la redistribución de la riqueza pues el individuo estaría en capacidad de proponerse un juicio racional en la toma de sus decisiones.

El caso de desigualdad de género, enconado en la guerra civil, también tendría solución con Kohlberg. Contraria a la postura de Gilligan, el planteamiento universalista del autor tiene en cuenta la variable que representa la cultura patriarcal que aún persiste en el mundo. Los estudios (REF) en los que se fundan las conclusiones del psicólogo fueron realizados alrededor del mundo: Taiwán, Turquía, Estados Unidos, entre otros; donde la mujer cumple un rol diferente en cada uno de ellas. Los resultados arrojaron (REF) un desarrollo más desfavorable en su mayoría con respecto a los hombres, producto del lugar que ocupan en sus sociedades y no por el estudio realizado.

Cerrar la brecha entre hombres y mujeres es fundamental para una sociedad justa. Para garantizar una seguridad jurídica, económica y social a las minorías tales como la comunidad LGTBI, los emigrantes o las negritudes; así como a la población vulnerable, en especial mujeres, niños y el campesinado, se requiere capacitar en educación moral a todos por igual, priorizando a las mayorías opresoras.

Ahora, una madurez cognitiva formada a partir del esfuerzo moral no garantiza la paz pero sí es el primer paso para alcanzarla. Una sociedad con ausencia de violencia es un cúmulo de esfuerzos tanto del Estado como de sus ciudadanos. La presente investigación es una invitación a la ciudadanía a pensar en el esfuerzo individual que demanda el postconflicto y al Estado apoyar esta tarea con las herramientas pertinentes. Una vez se consoliden las columnas que soportarán el peso de lo pactado en la Habana se deberá solucionar la pertinencia de una nueva jurisdicción en el sistema legal colombiano.

En este orden de ideas, ¿Cuál es entonces la relación entre la educación moral con una sociedad pacífica?

LA UTOPIA DE LA PAZ

Como se ha expuesto, la justicia transicional implica necesariamente resolver dilemas morales. Por un lado, por ejemplo, elegir entre la investigación y sanción de los principales violadores de derechos humanos privilegiando la agilidad en reparar a las víctimas y garantizar la no repetición; por el otro, individualizar cada caso en particular, favoreciendo la sanción debidamente ponderada. Resolver los dilemas de valores depende del desarrollo cognoscitivo y moral del individuo, como ya se expuso; en síntesis, la formación moral es indispensable para entender la envergadura de la justicia transicional, de ahí que la comprensión de este sistema sea directamente proporcional a las herramientas que el individuo tiene para un razonamiento maduro.

Por lo anterior, para alcanzar una amplia perspectiva sobre la justicia transición es indispensable desarrollar un concepto holístico de valores que posibilitan su debida implementación. En primer lugar, el valor de la paz: las diferentes civilizaciones tanto occidentales como orientales han estudiado las opciones para dirimir los conflictos que se presenten, en esta medida han surgido investigaciones sobre la paz, sus dificultades y rivalidades con otros valores igualmente deseados

en sociedad. En el caso colombiano, a partir de 1991 alcanza orden constitucional en los siguientes términos: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”¹⁷

Los primeros estudios sobre conflictos empleando teorías de juegos, estrategias matemáticas y principios de decisiones corresponden a la Universidad de Michigan (EEUU) en la década de 1950. Después, nace el Peace Research Institute en Oslo (Noruega) y el Journal of Peace Institute; a partir del florecer humanitario del Mayo del 68, el valor de la paz se piensa en términos positivos (derechos humanos, feminismo, ecología, no-violencia, globalidad) y no como se había pensado antes, en términos negativos consistía única en ausencia de hostilidades.

Para Galtung¹⁸ (2009), el estudio de la paz consiste en un triángulo compuesto de diagnosis-prognosis-terapia; es decir, construir la paz no solo involucra la reducción y prevención de la violencia sino la transformación no violenta y creativa de los conflictos. Una de las ideas principales del autor es que la paz se debe aplicar con conocimiento, imaginación, compasión y perseverancia. La no-violencia como la construcción más viable de alcanzar la justicia social.¹⁹

En síntesis, los reclamos por la paz pertenecen a la lucha por mejorar la educación, trascender la realidad de lo actual a la cultura pacífica implica cambios de paradigmas que solo se pueden lograr con un consenso de valores, la cual permite enfrentar dicotomías como la paz-guerra desde una perspectiva compasiva para mejorar nuestra condición humana.

¹⁷ Constitución Política de Colombia (1991), artículo 22.

¹⁸ CALDERÓN ROCHA, P. Teoría de Conflictos de Johan Galtung. Revista Paz y Conflictos, numero 2, 2009.

¹⁹ Para Galtung, el compromiso con el valor moral debe ser entendido como una cultura de la paz en donde la sociedad debe encontrar mecanismos para resolver los conflictos a partir de ella.

En concordancia con esta posición, el académico argentino Rapoport (1992) sostiene que el concepto sobre la paz guarda un fuerte nexo con la esfera del conocimiento, compuesto en gran medida por elementos culturales: proceso evolutivo directamente proporcional al compromiso con la paz, como el razonamiento, la compasión, la retención de lo aprendido y sobretodo, la transmisión a otras generaciones. Asimismo, el sentido de cooperación y reciprocidad se privilegian en un escenario donde la noosfera²⁰ ha sido transformada por una cultura de paz y no de guerra.

En culturas donde la guerra está institucionalizada, subyacen soportes ideológicos transmitidos por generaciones que deben transformarse en primera instancia con una educación ética adecuada, dirigida a llenar los vacíos morales causados por el odio que heredan las generaciones hijas del conflicto armado. En consecuencia, la paz es una ideología que interviene el pensamiento, el diálogo y las acciones.

Sin embargo, el concepto de paz no solo varia conforme los modos de vida sino también con las ideologías políticas: el orden de valores morales que guía al individuo en sus comportamientos políticos componen un sistema de creencias que son empleadas para los respectivos juicios de valor moral, económico, social y cultural. La diferencia entre la ideología y un estado de opinión es la continuidad, siendo el estado de opinión simplemente inconsistente.

Con la contemporaneidad, el tiempo de las ideologías políticas surgen como respuesta a las necesidades de movilizar las masas, además de identificar líderes y diferenciarlos de otros, siendo muchas veces empleado como mecanismo de manipulación. Como consecuencia, el

²⁰ En palabras de Mario Rapoport, la esfera del conocimiento.

mundo, especialmente occidental, ha experimentado un choque de grupos ideológicos, como grupos religiosos o políticos.

El término “ideología” nació en el siglo XVIII como la ciencia de las ideas, y después Napoleón lo empleó para referirse a sus opositores. Con el tiempo, el concepto se ha asociado como la teoría de los ídolos que naturalmente constituye una fuente de error; o también, en palabras de Marx: falsedad de conciencia y representación.

Históricamente, las ideologías han dividido las sociedades en defensa de la mejor posición, sin embargo esta dinámica no ha sido más que una manera de absorber al hombre ciegamente por la política, sin posibilidades de reconocer ningún otra postura fuera de la ideología planteada. La división de grupos conforme las ideologías no reconoce el valor de la realidad, cada vez pierden más sus señales de identidad y convergen con mayor frecuencia, justamente en los principios que atañen a los propósitos del hombre y su vida en comunidad.

Los fines propuestos por cada ideología se dirige paulatinamente hacia una postura más uniforme de libertad y tolerancia, donde se amalgaman con las otras prioridades que privilegia cada partido político. La relación entre la educación moral y sociedad pacífica es que la segunda es consecuencia de la primera. surge como necesidad de evitar que se instrumentalice al prójimo por encima de su calidad humana, alcanzando una perspectiva que comprenda un proyecto de vida más justo y equitativo. Para el efecto, el valor de libertad supone una importancia trascendental en el proyecto de sociedad civil. Asumir la libertad no solo implica ejercerla sino reconocerla universalmente por igual en términos de igualdad y solidaridad.

La política va más allá de una ideología o un juicio de valor, es una gestora de cambio positivo de la vida en comunidad. Las ideologías han sido acuñadas en muchas ocasiones por intereses particulares que se nutren de la ignorancia y los impulsos pasionales para su beneficio. Desde la década de los 80 en el siglo XX, el concepto de sociedad civil ha adquirido una connotación que involucra proyectos éticos como la solidaridad. Las ideas sobre libertades y derechos a la propiedad privada se empezaron a relacionar con el resto de garantías que debe ofrecer el Estado para alcanzar una armoniosa vida en comunidad.

El valor de la sociedad civil está en la distribución de bienestar. Después de implementar varias utopías sobre miles de vidas humanas, se vuelve indispensable repensar las soluciones propuestas y adecuarlas a la realidad, sin necesidad de pasar por encima de los logros reconocidos por el desarrollo de la razón: los derechos humanos.

En toda sociedad civil subyace una conciencia moral que se manifiesta a través de la opinión pública: ideas emitidas de manera deliberada por quienes cuentan con herramientas de entendimiento suficientes para emitir juicios racionales, sin ningún vicio de consentimiento ni mediación de intereses particulares. En otras palabras, un flujo de ideas racionales que parten de preceptos demostrables o probables en lugar de una mera intuición.

De ahí, su diferencia con la opinión publicada: en ejercicio al derecho de libre expresión que no contempla la imparcialidad y es fácilmente nublada por las impresiones sensitivas, pasionales o emocionales. Esta diferencia es importante en un contexto de justicia transicional, donde los

juicios deben pasar por una especie de horquilla de Hume²¹, que filtre la información que circulan al respecto. En breve, emitir un concepto de manera formal comporta un compromiso con la cooperación y solidaridad, aislando los intereses egoístas e individualistas

El potencial ético de una sociedad civil es directamente proporcional a su capacidad de solidaridad que permita superar el individualismo sobre el comunitarismo, sin esto no es posible una verdadera sociedad civil. Vivir en comunidad entraña virtudes de obligación mutua y cesión de libertades personales a cambio de justicia y paz, por ejemplo, en sociedad.

La pluralidad social puede ser tanto fuente de riqueza como de conflictos, la tendencia hacia la primera o la última depende del compromiso que los integrantes de una sociedad asuman por garantizar una convivencia grupal armoniosa. El pluralismo es dado cuando diferentes comunidades, con modos de vida (conceptos morales) diferentes deciden unir esfuerzos para convivir pacíficamente, situación que se logra identificando unos conceptos morales o valores éticos mínimos, que surjan independientemente de las concepciones de bien o mal del particular. En suma, consiste en hilar los proyectos grupales con las concepciones mínimas de justicia y paz que prevengan conflictos.

Para revitalizar la cultura social es indispensable los fines que comparte la comunidad, los propósitos que fijan sus esfuerzos colectivos. Pensar en bienestar es pensar en justicia y esta es imposible sin solidaridad. El problema es que es una virtud y no una obligación y como tal, requiere compromiso y formación. La justicia es la primera virtud que en sí misma encierra la sociedad.

²¹ El Libro de la Filosofía, Dorling Kindersley Ltda, 2011, p 151

Un ciudadano que cuente con las herramientas cognitivas suficientes para abordar dilemas morales desde una perspectiva universal, que beneficie las necesidades tanto suyas como las del prójimo, es un agente de cambio que en gran escala garantiza la coexistencia pacífica en comunidad.

El primer esfuerzo para construir el proyecto donde haya lugar la pluralidad de opiniones e identidades, es un modelo de justicia que permita hacer la transición del pasado hostil al futuro solidario, sin sacrificar los derechos de las víctimas a obtener en el menor tiempo posible la verdad, justicia y reparación.

El sistema de creencias de un individuo le otorga sentido a su entorno. La sociedad pacífica es un responsabilidad de todos en tanto el ciudadano la percibe como una obligación y el Estado garantiza las condiciones para que surja. Entonces, ¿En qué medida la formación moral del ciudadano influye en su compromiso con la construcción de una sociedad pacífica?

La formación moral del ciudadano determina en una medida significativa su entendimiento de solidaridad y empatía. Alcanzar un estadio superior en desarrollo moral implica necesariamente un compromiso personal con resolver todas las controversias por medios no violentos. Si lo que sabemos es una cuestión de conversación y práctica social, la clave del desarrollo personal son nuestros hábitos.

En otras palabras, el compromiso ciudadano durante la fase de implementación del acuerdo de paz es personal. El contenido de lo pactado tiene sentido en la medida que el individuo pueda simpatizar con frenar la violencia en principio. Para lo cual son necesarias las habilidades cognitivas que se alcanzan de la forma expuesta en el presente capítulo. Mientras se surte este proceso, el Estado es llamado en simultáneo a garantizar que las condiciones jurídicas, económicas y políticas se presenten.

La construcción de paz comprende varias fases donde intervienen todos los actores de la sociedad. El ciudadano debe aprender a convivir sin apelar a la violencia y el Estado necesita encontrar los instrumentos para mantener una convivencia pacífica entre todos. En 2016 se fijaron nuevos compromisos para el efecto ¿Cuáles son esos compromisos?, ¿Cuál es el rol que el Estado debe asumir durante el postconflicto? ¿En qué consiste la implementación del Acuerdo de Paz?

CAPITULO II

ETAPA ADMINISTRATIVA: RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO AL DILEMA ENTRE JUSTICIA Y PAZ EN EL CONFLICTO ARMADO

"La firma del acuerdo de paz en 2016 le dio al mundo la esperanza de que los conflictos políticos aún podían resolverse a través del diálogo. Sería terrible que esa idea resulte una ilusión." Fattal (2019)

Para efectos del presente trabajo, se entenderá Justicia Transicional como "las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada."²²

Ahora, se entenderá el concepto de impunidad en relación a los procesos penales que a pesar de ser reportados no son judicializados conforme al debido proceso, diferente a la impunidad social, la cual nunca ingresa efectivamente al sistema penal.

Entonces, ¿Es el Acuerdo de Paz del 2016 un mecanismo apropiado para transitar hacia una sociedad pacífica en Colombia? ¿Cuál es el compromiso del Estado frente a la paz después de lo pactado en la Habana? La hipótesis principal del presente capítulo desarrolla el concepto de Justicia Transicional como el mecanismo más idóneo para superar un conflicto armado y sanear una sociedad dividida por la guerra. Tal vez aún se deban realizar ajustes con respecto a la

²² Recuperado el 24 de noviembre del 2020 del siguiente enlace: <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

judicialización de cada caso concreto, pero mientras no haya ninguna otra propuesta que pueda resolver definitivamente sociedades en conflicto, el modelo aquí presentado será el más indicado. A continuación, se desarrolla la manera como el Acuerdo de Paz del 2016 crea las condiciones teóricas necesarias para transitar hacia una sociedad pacífica.

Pero, ¿El sistema de justicia transicional que propone el Acuerdo de Paz crea condiciones de impunidad?

Por mandato internacional, todo Estado tiene la obligación de realizar juicios penales que permitan imponer las penas más graves posibles a autores de graves violaciones a los derechos humanos. sin embargo, hay excepciones universalmente aceptadas como los contextos de justicia transicional, que admite el principio de ponderación con otros deberes del Estado, como lo es la paz.

Tanto la justicia como la paz son principios fundamentales de la sociedad. Con respecto a la justicia, el deber de perseguir las violaciones de los derechos humanos cometidos en su territorio tiene múltiples fuentes tanto nacionales como internacionales. Ahora, con respecto al deber de la paz, suele entenderse como resultado de la justicia y no como un deber moral de empatía por lo demás. A saber:

Sabemos cómo piensa otra persona, observamos el mundo desde la posición estratégica de esa persona. No solo captamos visiones y sonidos que no podríamos experimentar directamente, sino que entramos en esa mente ajena y compartimos sus actitudes y

reacciones. (...) la “empatía” en el sentido de adoptar el punto de vista de alguien no es igual que la “empatía” en el sentido de sentir compasión hacia esa persona, aunque la primera puede conducir a la segunda por una ruta natural. Entrar en el punto de observación de alguien nos recuerda que el otro tiene una primera persona, un tiempo presente, un flujo continuo de conciencia que se parece mucho al nuestro sin ser igual. Es fácil suponer que el hábito de leer las palabras de otras personas nos pueden habituar a entrar en su mente, con todos sus placeres y aflicciones.²³

En este orden de ideas, tanto justicia como paz reviste la misma importancia en la sociedad y su relación consiste en que ambos persiguen los mismos fines. ¿Qué pasa entonces cuando hay una dicotomía entre ambos? En relación con Robert Alexy, para desarrollar una colisión entre principios jurídicos del mismo orden es indispensable primer conocer cuál es la diferencia entre una regla y un principio.

Esta distinción es fundamental para entender el papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico y resolver entonces, los dilemas que se encuentran alrededor estos. Ambos conceptos son normas; Lo que diferencia unas de otras es, en primer lugar, la generalidad con la que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales; en cambio, el cumplimiento de las reglas dependen únicamente de su validez. Estas diferencias son útiles en el caso de resolver dilemas jurídicos entre dos principios o reglas que se contraponen.

²³ The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Editorial Pinguin, 2011. P 246

Con respecto a las reglas, los dilemas se pueden resolver introduciendo a una de las reglas una cláusula de excepción que permita la coexistencia con la otra o, simplemente eliminando una de las dos reglas pues la existencia de ambas deja a alguna inválida. Es decir, el debate se concentra en la validez excluyente entre una u otra. Por el contrario, como los principios ya se suponen válidos, los dilemas se resuelven en la dimensión del peso según el caso en concreto. En otras palabras, conforme a las circunstancias un principio precede al otro.

LOS CONCEPTOS DE JUSTICIA

Es cuando surge el debate acerca de los derechos humanos como prioridad del derecho internacional, independientemente de la soberanía de cada Estado. Pese a los logros que diversas comunidades han experimentado, los esfuerzos por instaurar un orden internacional entorno al reconocimiento de unos derechos fundamentales es reciente, y aún más, la educación que valore la correcta comprensión de los principios de estas garantías. El primer paso se establece en 1945 con el Tribunal Militar de Núremberg contra los actores vencidos en la Segunda Guerra Mundial²⁴ crímenes contra la paz y lesa humanidad. Un año más tarde se instala el Tribunal de Tokio, organismo que precede al Tribunal de La Haya, encargado de garantizar el respeto por los derechos humanos violentados en el Acuerdo de Dayton que formalizó la partición de Yugoslavia (1993); un año más tarde inicia el Tribunal de Arusha en Ruanda a causa las violaciones a derechos humanos en masa.

²⁴ Por primera vez en la historia, son investigados, juzgados y sancionados personas naturales por parte del derecho internacional. Este tribunal representa el precedente más relevante acerca del reconocimiento de los derechos humanos en el orden mundial contemporáneo.

En consecuencia, se crea la Corte Penal Internacional (1998) como el organismo encargado de garantizar, investigar, juzgar, sancionar y ordenar la reparación a las víctimas por violaciones a derechos humanos. En el caso colombiano, el Gobierno se ha adherido a todos los instrumentos diplomáticos que comprometen al Estado en esta materia, lo que hace que el respeto por los derechos humanos sea un asunto de primer orden, una prioridad incluso constitucional.²⁵

En este contexto, se hace indispensable repensar la manera como se está abordando el problema, la respuesta más viable de acuerdo a la experiencia en violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, ha sido la justicia transicional: medida jurisdiccional que traza como objetivo reconocer el papel de víctima a las personas vulneradas propendiendo por su reparación y garantías de no repetición; con iniciativas por la paz, reconciliación y democracia, ha logrado reconstruir sociedades en conflicto prolongado como Sudáfrica o Camboya.

El sistema transicional de justicia consiste en adaptar la legislación a sociedades en transformación, después de haber violaciones generalizadas a los derechos humanos. En otras palabras, no es tan solo una excepción a la jurisdicción penal de un país o el derecho penal internacional. En resumen, es el mecanismo encargado de reconstruir un tejido social dañado.

En su implementación, la justicia transicional funciona diferente a la jurisdicción ordinaria, pero ambas comparten como propósito el mismo impacto positivo en la sociedad: corregir las faltas

²⁵ Sentencia C-067/02, Marco Gerardo Monroy Cabra (Magistrado Ponente): “ (...) resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que podría denominarse bloque de constitucionalidad strictu sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., artículo 93)....”

cometidas en razón a la condición humana que imposibilitan la convivencia armoniosa en sociedad.

El enfoque holístico²⁶ adoptado en cada sistema de justicia transicional se compone en suma de seis iniciativas: acciones penales encausadas a los grandes actores de las violaciones a derechos humanos cometidas; remediar los abusos cometidos durante periodos clave del pasado reciente y previniendo su repetición, a través de una Comisión de la Verdad; con patrocinio del Estado e iniciativas internacionales, crear programas de reparación material y moral por los daños causados por abusos del pasado; reforma interinstitucional con un enfoque en las Fuerzas Armadas e iniciativas de conmemoración encaminadas a que estimule la consciencia moral. Lo anterior, con un enfoque en minorías afectadas por el conflicto.

Independiente de la forma procedimental, la justicia relacionada con derechos humanos, aboga por cuatro obligaciones de carácter fundamental para el Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar. El delito y las penas han sufrido significativas transformaciones en el tiempo, hecho que se refleja en la evolución del derecho procesal penal. Desde tiempos de Confucio, la filosofía política se ha preguntado acerca del propósito de las penas y castigos ¿por qué debe existir la pena?

En respuesta, se ha defendido la posición a favor del castigo alegando la necesidad de reparar a las víctimas que causan las acciones irracionales, posibles en cualquier sociedad, a través de una

²⁶ Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional: “El enfoque holístico de una justicia transicional implica tomar en cuenta toda la gama de factores que contribuyeron a las violaciones de derechos humanos”.

medida que favorezca la investigación de los hechos para resarcir a las víctimas con un castigo proporcional a la falta, además de garantizar la no repetición.

En suma, si bien la formación moral reviste una importancia significativa en la construcción de una sociedad pacífica, no es suficiente. Las medidas también deben involucrar un sistema eficaz, que permita investigar, juzgar y sancionar a los responsables mientras se repara a las víctimas, en tiempos procesales prudentes. La Justicia Transicional no solo ofrece los resultados propuestos por la justicia penal ordinaria, sino que posibilita hacerlo a mayor escala, privilegiando principios como la celeridad y economía procesal.

ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE PAZ (2016)

El Acuerdo de Justicia y Paz (2005) fue un precedente importante en la historia de justicia transicional en Colombia pues construyó las bases sobre las cuales se iba a edificar el próximo cese de hostilidades con las FARC-EP; al respecto la Corte Suprema de Justicia, en el proceso No. 34415 (2011) comenta:

La justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive nuestro país de cuenta de los millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica.

Y la forma en que la administración de justicia se puede vincular con la superación, o por lo menos con la mitigación de este drama, es facilitando la restitución de tierras en la fase temprana del proceso transicional.

Sin embargo, han sido muchas las razones que se le atribuyen al origen del conflicto interno colombiano: la polarización política, el bipartidismo, el abuso del poder, la distribución del ingreso, el centralismo del Gobierno Nacional, entre otros; sin importar cuál, en concreto, haya sido la causa, las guerrillas producto del conflicto, han transcurrido en el tiempo como parte del panorama Nacional, siendo la causa y el efecto de innumerables hechos violentos contra civiles y agentes del Estado.

En consenso, el periodo histórico de Colombia denominado: “La Violencia” (1925 – 1955), constituye un precedente importante en el nacimiento de las guerrillas rurales, a causa de múltiples factores que involucra, inclusive al rápido crecimiento económico de Estados Unidos y su impacto en la economía colombiana. El sociólogo y escritor colombiano, Alfredo Molano Bravo, esbozó en su artículo Fragmentos de la Historia del Conflicto Armado (1920-2010):

(...) la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE.UU. Después de la Primera Guerra Mundial. El alza del precio del café y el crecimiento de la demanda interna desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras donde predominaban el arriendo y la colonización

de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los convenios de trabajo con las haciendas y los colonos invadían tierras que pertenecían a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de ligas campesinas jugaron un papel determinante, que en muchas regiones fue reprimido por armas oficiales o privadas.

El Acuerdo de Paz (2016) es el resultado de un esfuerzo aún presente, por encontrar respuesta a las necesidades que la sociedad colombiana tiene en relación con la paz. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Acuerdo de Justicia y Paz del 2005 y el Acuerdo de Paz de 2016?

El último proyecto de justicia transicional en Colombia se realizó durante el Gobierno Uribe en 2005, cuando los paramilitares pactaron la dejación de lucha armada por algunas generosas concesiones. Como antecedente reciente, es razonable emplearlo como comparativo con el proyecto del 2016.

El proceso de transformación de la guerra en Colombia empezó a cambiar con los debates acerca del derecho de las víctimas a la justicia, verdad y reparación; particularmente con la propuesta legislativa de Justicia y Paz (2005) durante el gobierno de Álvaro Uribe²⁷. Frente al tema, los juristas Rodrigo Uprimny, Nelson Camilo Sánchez y Laura Marcela Lozano comentaron sobre el modelo de transición colombiano, para la Escuela Judicial (2011):

²⁷ A partir del 2005, un gran número de actos administrativos han sido promulgados en el marco de la justicia transicional que se implementa en Colombia.

A partir del año 2003, el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe inició ante el Congreso el desarrollo de una nueva infraestructura legal para buscar el desarme de los grupos armados al margen de la ley. Inicialmente presentó un proyecto de ley de “alternatividad penal”, el cual contemplaba la judicialización de guerrilleros y paramilitares por delitos diferentes al concierto para delinquir con el propósito de conformar grupos guerrilleros y paramilitares. Pero el proyecto no prosperó en el Congreso por contener demasiadas prerrogativas a favor de los desarmados olvidando elementos esenciales como la verdad y la justicia, pues fácilmente la pena privativa de la libertad era condonable por la contribución a la paz nacional. Es decir, el proyecto se adhería con un modelo de perdón y olvido.

Posteriormente se presentaron nuevos proyectos y, a partir de la discusión legislativa, finalmente se adoptó el modelo establecido en la Ley 975 de 2005. Así, esta normatividad otorga importantes beneficios punitivos a aquellos combatientes pero bajo la condición de que se desmovilicen y cumplan con ciertas exigencias, como la confesión de sus delitos y la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, puesto que establece que esas personas recibirán una pena alternativa de cinco a ocho años de prisión, aun cuando hayan cometido masivamente crímenes atroces, como torturas, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros o violencias sexuales, en vez de recibir las penas ordinarias de hasta 40 años previstas por la legislación penal. (Ley 906 del 2004)

De la misma manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el concepto de justicia transicional y la aplicabilidad en Colombia, además de los desafíos jurídicos por resolver y la

prontitud con la que se debe implementar. En respuesta a una demanda de inconstitucionalidad, la Corte se pronuncia mediante sentencia C-760 de 2006 diciendo:

Trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares, que aspira a superar una situación de conflicto o postconflicto, haciendo efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social.

(...) la justicia transicional se ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad que atraviesa por un conflicto o postconflicto, que plantean grandes dilemas originados en la compleja lucha por lograr un equilibrio entre la paz y la justicia.

Reconociendo la importancia de esta clase de medidas en evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, ayudando a reparar y resarcir a las víctimas y construir el tejido social afectado por el conflicto. La corte en igual medida reconoce la importancia, desde los inicios del debate sobre justicia transicional, de implementar un modelo que le permita a la sociedad colombiana superar las discusiones que han afectado la vida de millones de personas y remplazarlo por un sistema participativo y democrático, donde haya lugar el diálogo conciliado y sin hostilidades.

Ahora, con relación al contenido sustancial del Acuerdo, la agenda propuesta por la Mesa construyó un boceto de los principales tópicos que se debatirían en la negociación; esta

organización se pensó de manera estratégica para que los temas álgidos del conflicto se conciliaran en últimas instancias, donde repensar el proceso o renunciar al mismo implicara un costo más alto para ambas partes.

De esta manera, se alcanzaron los preacuerdos de la siguiente manera:

1. Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral²⁸

El tema de la tierra, también conocido durante los diálogos como “paz territorial”²⁹, aboga por el desarrollo agropecuario y la mejora de la calidad de vida campesina en el país, la cual ha sido por décadas un reglón poco favorecido en las políticas públicas de la Nación; la Constitución Política (1991) representa los recientes esfuerzos por integral la ruralidad del país al proyecto modernizador de la zona urbana. Sin embargo, los intentos por agrupar el país en un solo proyecto han sido afectados por la guerra de guerrillas, obligando a sectores poblacionales a marginarse de los servicios básicos del Estado y verse atraídos por la criminalidad y las guerrillas.

Entendiendo que lo anterior fue por años la principal causa de lucha de las FARC-EP, las negociaciones adoptaron debatir en primera instancia el tema de la tierra. En palabras de Juan Manuel Santos, *La Batalla por la Paz* (2019), editorial Planeta Colombiana S.A.: “La mesa de la Habana fue la mejor excusa para comprometer al Estado a priorizar el campo y hacer reformas

²⁸ Pre-acordado el veintiséis (26) de mayo del 2013, es decir, un año después de haberse instalado la mesa de negociación de forma definitiva y pública.

²⁹ Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz.

que debíamos haber hecho hace mucho tiempo.” En este contexto, las novedades que nacieron del primer pre-acuerdo fueron principalmente:

- Creación de un Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, su objeto es redistribuir los predios que hayan sido adquiridos a partir de la ilegalidad, concediendo por medio de una titulación masiva a los campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente”³⁰, para que puedan participar o mejorar su participación en la vida productiva del campo.
- Creación de una Jurisdicción Especial Agraria (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), con funciones de protección a la vida en el campo y, como novedad, implementación de programas de desarrollo dirigido a las regiones más afectadas por el conflicto y sometidas al narcotráfico.³¹

Con lo anterior, se busca en parte, garantizar la no repetición de la violencia; en otras palabras, volcar los esfuerzos estatales hacia el campo, donde siempre se ha concentrado la pobreza extrema y la materialización de la inequidad en Colombia.

2. Participación política: apertura democrática para construir la paz³²

Conceder el derecho de participar activamente en la política nacional es un tema crucial en el Acuerdo, pues el principal motivo por el cual las FARC-EP apelaron a la ilegalidad en el pasado proviene del pacto que creó el Frente Nacional, la cual privó a los partidos políticos con

³⁰ Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016.

³¹ Uno de los mayores logros que alega lo acordado son los planes por mejorar la vida campesina traducido en educación, vivienda, salud y especialmente seguridad.

³² Pre-acordado el seis (6) de noviembre del 2013.

ideologías marxistas-leninistas o maoístas el derecho de debatir y participar en la construcción de país, desconociendo la realidad pluripartidista para entonces.

En este capítulo, se pone de manifiesto la necesidad de “cambiar las balas por los votos”. Es una premisa importante en el contexto pues a partir de ella se posibilita transar la entrega de armas a cambio del ingreso a la política.

Uno de los retos importantes del tópico son los antecedentes que pesan sobre las propuestas, dado que en experiencias anteriores la misma guerrilla y otras similares habían hecho el tránsito a la vida política y el precio social y ético fue desalentador. Los opositores desde entonces habían crecido y a pesar de haberse pactado un acuerdo con grupos paramilitares, las amenazas eran sustanciales; asimismo, las regiones donde la guerrilla operaba se encontraban sin ninguna representación en el Congreso.

Para el efecto, el equipo negociador optó por aprehender las lecciones de la historia y construir garantías de seguridad y jurídicas para hacer posible la paz; eliminar o prevenir los motivos que promovieran un rearme en el futuro, extendiendo la participación política a los desmovilizados y las víctimas que habitan el territorio en conflicto; en resumen, ampliar la democracia. De ahí que, se acordó:

- Implementar un Sistema de Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, una protección igual de prioritaria a cualquier otro colombiano en estado de amenaza.

- Estatuto de la Oposición: es un mecanismo democrático establecido por la Constitución Política (1991), capítulo 3, artículo 112, que a pesar de alcanzar un orden constitucional no había sido reglado por ningún gobierno y se tomó la oportunidad para legislar al respecto; en relación con la constitución, el artículo reza:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

- Curules especiales en la Cámara de Representantes para las regiones permeadas por el conflicto, en representación de las víctimas aisladas de la participación política a causa de la guerra, puedan hacer parte de la reconstrucción del tejido social dañado.

- Una vez hecho el tránsito a la vida política, los ex guerrilleros pueden contribuir al panorama político en campaña por medio de la creación de un partido político que los represente. Como parte de su transición, se reconoce una participación en el Congreso de la República de manera transitoria mientras se terminan de reincorporar a la sociedad colombiana de la siguiente manera:

Tabla 1

Participación política de las FARC-EP

CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS	
CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
CÁMARA DE REPRESENTANTES	SENADO
Cinco curules	Cinco curules
Durante dos periodos parlamentarios 2018 - 2022 y 2022 - 2026	Durante dos periodos parlamentarios 2018 - 2022 y 2022 - 2027
Participación importante más no determinante: el Congreso de la República lo conforma un total de 280 miembros	

Nota. Elaboración propia, información recuperada de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

3. Fin del conflicto: acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas.

Este compromiso consiste en la dejación de armas de la contraparte y los esfuerzos por insertarlos a la vida social colombiana. El término pactado para entregar las armas al equipo de verificación de la ONU fue dentro de los 180 días siguientes a la firma final para recibir todas las garantías de seguridad que el Estado le ofrece a cambio de su compromiso con la paz.

En resumen, hay cuatro mecanismos fijados en el tercer capítulo que garantiza un post-conflicto: medidas de protección, justicia, seguridad y políticas. Se establecen zonas veredales transitorias de normalización en donde se encontrarán los campamentos de los desmovilizados que serán capacitados para una reincorporación política y socio-económica.

4. Solución de problemas de las drogas ilícitas

El tema de cultivos ilícitos ocupa un lugar especialmente importante en los Acuerdos pues, gran parte del narcotráfico colombiano corresponde a las guerrillas, particularmente las FARC-EP; esta práctica contribuyó al fortalecimiento del músculo financiero, por medio del cual se incrementó su margen de maniobra y su capacidad de lucha.

Es por lo anterior, que la solución que planteara el acuerdo en relación al narcotráfico debía ser auditada por diferentes renglones de la economía colombiana y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, como víctima del narcotráfico.

Para los fines, se estableció: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, trabajar con las comunidades para transformar las condiciones de los territorios afectados por el conflicto; Acuerdos de Sustitución y no Resiembra, las comunidades se comprometieron con la sustitución voluntaria y no concertada; Planes de Asistencia Inmediata, medida de apoyo inmediato para garantizar el sustento y la seguridad alimentaria de quienes hagan parte del programa; Enfoque de Desarrollo Rural, el presente capítulo hace parte de la Reforma Rural Integral mencionada en primera instancia del Acuerdo; fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados y planeación participativa, a saber:

La piedra angular del nuevo enfoque será la puesta en marcha de procesos de planeación participativa, que permitan a las comunidades tomar la decisión de abandonar estos cultivos y transitar mediante la sustitución hacia otras actividades económicas. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades afectadas por los cultivos y las autoridades nacionales y locales que permita resolver sus problemas. Para lograrlo, se necesita la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo. A través de una planeación de abajo hacia arriba, las comunidades harán un diagnóstico de sus necesidades, construirán sus planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda) y estarán activamente involucradas en su ejecución

En suma, el Gobierno se compromete a poner en marcha estas políticas y luchar contra la corrupción, y las FARC-EP se comprometen a contribuir a la solución del problema y a poner fin a cualquier relación que haya tenido con el narcotráfico.

5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto

El Sistema Integral está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz. Es la primera vez que un sistema de esta naturaleza se acuerda en una mesa de conversaciones de paz³³, los compromisos pactados consisten en:

- Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
- Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas
- Medidas de reparación integral para la construcción de la paz
- Jurisdicción Especial para la Paz
- Garantías de no repetición

En los sistemas propuestos, participarán las víctimas, los desmovilizados, agentes del Estado, paramilitares desmovilizados y terceros civiles. De la siguiente manera:

Tabla 2

³³ Recuperado el 25 de noviembre del 2019 de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf

SISTEMA DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS		
Comisión de la Verdad	La Comisión busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y el reconocimiento de las víctimas, así como promover el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto armado y la convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo.	Para ello pondrá en marcha un proceso de participación amplio y pluralista en el que se oirán las diferentes voces y visiones, y creará espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a las víctimas.

Unidad de Búsqueda de Desaparecidos	<p>Esta unidad especial de alto nivel tendrá el mandato de buscar e identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, localizar y realizar una entrega digna de sus restos a los familiares</p>	<p>Para ello recolectará y cruzará la información de bases de datos institucionales y no institucionales, establecerá el universo de personas dadas por desaparecidas, pondrá en marcha planes de búsqueda y exhumaciones, y llevará a cabo procesos de identificación. Al final, entregará a los familiares un informe sobre lo acaecido a la persona desaparecida y, cuando sea posible, hará una entrega digna de los restos.</p>
--	---	--

<p>Medidas de Reparación</p>	<p>El fin del conflicto armado representa una oportunidad única para fortalecer el programa de reparación integral de víctimas que viene implementando el Estado colombiano. El acuerdo fortalece la reparación a través de tres medidas principales:</p>	<p>El reconocimiento de responsabilidades, mediante actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad concertados con las víctimas y las comunidades, para que quienes causaron daños los reconozcan, pidan perdón y se comprometan a repararlos. Quienes causaron daños deben contribuir a repararlos a través de acciones concretas como obras de reparación colectiva a las comunidades (por ejemplo, desminando o construyendo infraestructura) y la reparación material de las víctimas.</p>
-------------------------------------	---	--

Jurisdicción Especial para la Paz	Es el componente judicial del Sistema Integral. Busca, ante todo, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del Sistema.	Conforme al proceso que se fije para tasar la pena
--	--	--

Nota. Elaboración propia, información recuperada de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

En concordancia, los fines perseguidos son la prelación de las víctimas. Así que se niega de posibilidad de amnistiar los crímenes más graves, es decir, aquellos que corresponden a estándares internacionales; beneficios penales para aquellos que contribuyan con la creación de la verdad por medio de rendición de cuentas, sin embargo en ningún caso habrá impunidad pues se fija una serie de tasación de la pena privativa de la libertad conforme al caso., como se expone:

Tabla 3

El concepto de la pena

ARQUITECTURA DE LA PENA		
<u>Quienes no reconozcan la verdad y responsabilidad</u>	<u>Quienes haga reconocimiento de la verdad y responsabilidad</u>	<u>Quienes haga reconocimiento de la verdad y responsabilidad</u>
NA	Relato extemporáneo	Relato oportuno
15 - 20 años pena privativa de la libertad	5 - 8 años privación de la libertad	5 - 8 años privación de la libertad
	2 - 5 años privación de la libertad Exclusiva para quienes no hay tenido una participación determinante	Comprende restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución
Régimen carcelario ordinario	Función restaurativa y reparadora	Función restaurativa y reparadora
	Régimen carcelario ordinario	Régimen carcelario ordinario

Nota. Elaboración propia, información recuperada

de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

6. Implementación, Verificación, y Refrendación

Para los fines, el acuerdo establece unos mecanismos que protegen lo pactado frente a los procedimientos legislativos y políticos de los cuales puede ser afectado, a través de una Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz que:

Se creará después de la firma del Acuerdo Final para hacerle seguimiento a la implementación y elaborar un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos a 10 años sobre la base del borrador del Gobierno Nacional. Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos, así como de organizaciones sociales y comunitarias. Y se adoptarán diversas medidas para garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, así como para prevenir cualquier forma de corrupción

Asimismo, el acuerdo contará con mecanismos de verificación de los acuerdos, acompañamiento internacional y refrendación ciudadana. Entonces, ¿Por qué no fue posible alcanzar un Acuerdo de Paz con las FARC-EP antes del 2016? ¿Por qué ganó el “no” en el plebiscito que buscó refrendar el acuerdo? ¿En qué consiste la oposición?

Dado el recorrido histórico del conflicto, las condiciones antes del gobierno Uribe eran diametralmente opuestas en relación con las FARC-EP. Sin embargo, las críticas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz produjo un cisma en el panorama político colombiano, alegando que la justicia transicional adoptada era tan permisiva que ocasionaba impunidad en la mayoría de crímenes; sin embargo, la perspectiva negacionista no logra mantener su relato en un

plano académico pues subestima el sistema y no contempla un proyecto sostenible en el tiempo. Estudios recientes alegan que la violencia implica atraso físico e intelectual en la cadena evolutiva; Steven Pinker (2011) por ejemplo, desarrolla la idea en los siguientes términos:

El retroceso de la violencia afecta a todos los aspectos de la vida. La existencia diaria es muy distinta si hemos de estar siempre preocupados por si nos raptarán, violarán o matarán, y es muy difícil promover o desarrollar artes sofisticadas, centros de aprendizaje o comercio si las instituciones pertinentes son saqueadas o incendiadas poco después de haber sido construidas

cualquier instrumento que frene la violencia o, por lo menos, intente hacerlo, es plausible. Por lo anterior, las dicotomías entre la paz y otros valores crean debates que caen en la divagación si no se consideran sustentos teóricos específicos para resolverlo. Es por esto que el presente capítulo pretende explicar cómo el dilema de la paz lleva a transformar las condiciones de la justicia para que puedan coexistir.

En principio, el proyecto de Justicia y Paz se propone en cumplimiento del valor constitucional de la paz, como uno de los fundamentos del Estado; asimismo, la paz como propósito central del derecho internacional y los convenios, tratados y acuerdos que la Nación se ha comprometido en el ejercicio de su política exterior; también se ha soportado en la existencia del indulto y amnistía para delitos políticos en la arquitectura jurídica del país; Por último, el sustento para proceder con la justicia transicional, particularmente, el Acuerdo de Justicia y Paz fue la observancia de

criterios de proporcionalidad y razonabilidad sin contradecir las normas constitucionales y el sistema penal ordinario.

En consecuencia, en el año 2003 hubo el primer acercamiento por parte del Gobierno al presentar al Congreso su primera propuesta para una construir una justicia y paz, sin haber logrado la mayoría requerida porque los privilegios en la judicialización de los guerrilleros no eran proporcionales con el objetivo de la verdad y reparación.

Así, en el año 2005, se logra alcanzar la Ley 975 del 2005 que incluyó las observaciones dadas al proyecto pasado como: confesión de los delitos, entrega de los bienes para reparar a las víctimas, penas privativas entre cinco y ocho años (a pesar de haber cometido crímenes atroces en masa, incluyendo violencia de género y abusos sexuales) y la desmovilización.

En general, el principio del acuerdo es desarmar y desarticular los grupos guerrilleros y paramilitares de Colombia a través de un sistema transicional que impida la continuidad y repetición de la violencia, con elementos mínimos de justicia, verdad y medidas de reparación, es decir, buscar un equilibrio entre la justicia y la estabilidad política.

Para los efectos, el procedimiento penal extraordinario plateado por el Acuerdo (2005) se desarrolla en tres estadios, conforme la siguiente gráfica:

Tabla 4

Comparación con el acuerdo que antecede al firmado con las FARC-EP

ACUERDO DE JUSTICIA Y PAZ LEY 975 DEL 2005		
VERSIÓN LIBRE E INVESTIGACIÓN (Artículo 11)	IMPUTACIÓN Y FORMULACIÓN DE CARGOS	SENTENCIA
Desmovilización colectiva, individual y grupos ilegales con acuerdo humanitario	Audiencia de formulación de imputación se ordena a solicitud de la Fiscalía al Magistrado Ponente	En caso de haber una aceptación de cargos, el Magistrado Ponente tendrá diez (10) días para fijar sentencia
No debe tener vínculos con el narcotráfico o enriquecimiento ilícito	Se sustenta por los hallazgos obtenidos en la investigación realizada junto con la Unidad de Justicia y Paz	Si el imputado acepta parcialmente los cargos hay un rompimiento de la Unidad Procesal
Entrega de bienes producto de la actividad ilegal	Se celebra dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la solicitud del fiscal encargado.	En sentencia deben estar mencionadas detalladamente la pena principal y las accesorias
Suscribir acta de compromiso	Es posible proceder con la detención preventiva del imputado	Se menciona la manera puntual cómo se pretende reparar a las víctimas

<u>FISCALÍA DE CONOCIMIENTO</u>	<u>FISCALÍA DE CONOCIMIENTO</u>	<u>COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN</u>
Frente a quien se rinde la confesión del investigado, a partir de la lista de los desmovilizados	En un término de sesenta (60) días se debe verificar los hechos, encontrar pruebas y allegar al proceso información relevante	Formula criterios conforme el caso concreto para reparar a las víctimas del caso
La información recolectada tiene plenos efectos probatorios	Los términos de prescripción se interrumpen desde la formulación de acusación por parte de la Fiscalía	Plantea la capacidad económica del desmovilizado o el bloque cuando se trata de desmovilización colectiva
<u>MAGISTRADO CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS</u>	<u>MAGISTRADO CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS</u>	Se declara la extinción de dominio de los bienes dados en la desmovilización
El proceso queda a disposición del magistrado ponente.	En esta instancia puede haber una aceptación de cargos por parte del imputado	
La Unidad de Justicia y Paz y Fiscalía, quedan encargadas de investigar la versión	En caso de no haber aceptación de cargos, el proceso se traslada a la Justicia Ordinaria	

rendida en la versión libre.		
---	--	--

Nota. Elaboración propia, información recuperada de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/04/ley_975_de_2005.pdf

Tal como se observa, el sistema de justicia penal transicional que plantea el Acuerdo contempla un procedimiento ágil, oral y especial que permite investigar, judicializar, condenar, reparar y garantizar la no repetición con penas entre los cinco y ocho años como máximo, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos mínimos que establece la ley.

Adicionalmente, crea organismos de control, vigilancia e investigación como la Unidad de Justicia y Paz, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En resumen, el enfoque de los mecanismos propuestos es restablecer los derechos de las víctimas para acceder a las penas alternativas; en otras palabras, es un requisito de procedibilidad, ningún desmovilizado puede apelar a los beneficios del acuerdo sin antes haber contribuido a la reparación de las víctimas. Precisamente en eso consiste la justicia transicional, en concentrar los esfuerzos en las víctimas.

Ahora, aunándose a los esfuerzos por el acuerdo principal del 2005, se promulgaron dos más que terminan por reglamentar el sistema transicional de Justicia y Paz: Acuerdo de Verdad Histórica

y la Acción de Restitución de Tierras; la posibilidad de ser indultado de acuerdo con lo pactado tenía relación con la definición del delito político por parte del Código Penal.

Una de las propuestas para dar vía libre al procedimiento penal especial fue el de reformar el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) para permitir que el principio de oportunidad cobijara a los desmovilizados bajo ciertas condiciones, siempre y cuando colaboraran con la justicia y la prohibición de reincidir en la delincuencia. Sin embargo, la Corte Constitucional impidió la propuesta por no ser procedente, especialmente frente a los casos de lesa humanidad.

Es así como la **Ley de la Verdad Histórica** (Ley 1424 del 2010) continuó con la construcción del tejido social afectado, al dar la posibilidad a quienes no hayan participado en crímenes atroces, dentro del primer año de promulgación de la ley, de hacer parte de mecanismos no judiciales a través de los cuales se pudiera reconstruir la memoria histórica del conflicto, además de pagar los daños ocasionados más un servicio social como medio para reincorporarse en la sociedad.³⁴

Dentro del entramado jurídico, también hace parte la **Ley de Restitución de Tierras** que busca establecer una serie de medidas administrativas, judiciales, sociales y económicas que reconozca a las víctimas en su condición y le restituya sus derechos para su dignificación.

En contexto, el Acuerdo de Paz (2005) que precede al suscrito en 2016, consiste en la creación de un marco jurídico transicional para la paz del país, en primer lugar fijando amnistías a delitos

³⁴ Los delitos han sido enunciados en la Ley de Verdad Histórica de manera taxativa, los cuales son: concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, transmisores, receptores y el porte ilegal de armas.

menores y penas privativas de la libertad entre 5 a 8 años a delitos graves; asimismo, la implementación de organismos encargado de administrar, investigar y publicar los estudios acerca del surgimiento y desarrollo del conflicto armado en Colombia; finalmente, crenado mecanismos para restituirle los derechos que le han sido violentados a las víctimas especialmente de paramilitares, como el desplazamiento forzado, minas antipersonales, bombardeos, secuestros, extorciones, entre otras expresados explícitamente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De manera que el sistema de justicia transicional del 2005 en Colombia se plantea desde el 2005 al 2011 así:

Tabla 6

El desarrollo del Acuerdo de Justicia y Paz (2005)

LEY DE JUSTICIA Y PAZ	LEY DE VERDAD HISTÓRICA	LEY DE VÍCTIMAS
Facilitar la desmovilización de los paramilitares en Colombia	Crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, encargada de la perseverancia de la memoria histórica del conflicto en Colombia	Con el objetivo de promover la paz y reconciliación nacional, que establece una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que reconozca el derecho a las víctimas.

Fija el procedimiento penal transicional para aplicar las amnistías y las penas conforme al delito	La función se descentraliza en el Centro Nacional de Memoria Histórica con un enfoque en las víctimas del paramilitarismo	Son víctimas quienes consideren haber sido afectados por el conflicto armado después del primero (1) de enero de 1985.
Crea la jurisdicción especial para la paz.	Las publicaciones y estudios son de acceso público y se comparten a través de la página web del Centro.	Con la ley, las víctimas podrán recibir ayuda humanitaria de emergencia.

Nota. Elaboración propia, información recuperada de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/04/ley_975_de_2005.pdf

En conclusión, la Jurisdicción Especial para la Paz no proporciona más impunidad de la que el sistema de justicia ordinaria permite. Por el contrario, funciona como un complemento a la tarea judicial en materia penal. Por lo cual, cualquier sistema normativo que aborde en concreto las vicisitudes del conflicto armado es más efectivo.

El sistema de justicia transicional resuelve de manera concreta la necesidad de un sistema normativo para el caso concreto. Reconoce en primera instancia las condiciones especiales en la que se encuentra la sociedad, las características del panorama político, económico y social en Colombia, además de la necesidad de investigar, juzgar, sancionar y reparar conforme las capacidades del Estado.

El sistema actual es el resultado de un arduo proceso de paz, que en ningún otro momento se pudo celebrar. La Justicia Especial para la Paz advierte la necesidad de darle celeridad a los procesos jurídicos con la aplicación del principio procesal de concentración, se enfoca en la reparación de las víctimas y traza un plan para superar la violencia colombiana. Cualquier otro modelo diferente a este habría resultado utópico o inviable.

La principal diferencia entre la justicia transicional creada en 2005 y la implementada en 2016 son las garantías que se ofrecen en relación a la pena. Sin embargo, cualquier comparación que se realice pierde contexto pues las condiciones que rodearon ambos procesos son diferentes; versan sobre actores opuestos que no comparten la misma historia.

No fue posible un acuerdo de paz antes del 2016 por las razones ya expuestas: lograr una correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla, convertirlos en aliados, negociar en medio del conflicto, mantener el proceso de paz en la discrecionalidad y contar con el apoyo internacional solo fue posible durante la primera década del siglo XXI.

Entre más se tarde una jurisdicción especial que investigue, juzgue, sancione y además, repare a la víctimas, mayor es el riesgo de la impunidad. En resumen, el acuerdo de paz no procura ninguna impunidad en tanto se estructura de una manera que condiciona el indulto bajo condiciones puntuales.

En conclusión, el Acuerdo de Paz del 2016 es un mecanismo apropiado para transitar hacia una sociedad pacífica en Colombia dado que aborda los ejes centrales del conflicto armado,

reconociendo la necesidad de una transformación social, económica y cultural a través de una jurisdicción especial que se ocupe del tránsito sustancial hacia la paz. La justicia es una construcción social que depende de las circunstancias. Ahora, ¿cómo se debe abordar los compromisos de los ciudadanos y el Estado en comunidad? ¿Cuáles son los retos que plantea el postconflicto como colectivo?

CAPÍTULO III

ETAPA SOCIAL: LA RESPUESTA CONJUNTA AL DILEMA ENTRE JUSTICIA Y PAZ EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO

En la actualidad, la humanidad es producto de un declive histórico de la violencia. Hoy en día son más los muertos a causa de accidentes de tránsito, por ejemplo, que por enfrentamientos bélicos. Pese a casos excepcionales en todo el mundo, la sociedad ya no se encuentra atenazada por la guerra. Al respecto, Pinker (2011) ha expuesto que:

La naturaleza humana también tiene rasgos para poder subir a la casilla pacífica, como la solidaridad y el autocontrol. Incluye canales de comunicación como el lenguaje, y está dotado de un sistema de razonamiento combinatorio abierto, sin desarrollo preestablecido. Cuando el sistema se perfecciona en el crisol del debate, y sus productos se acumulan mediante la alfabetización y otras formas de memoria cultural, puede crear maneras de cambiar la estructura de compensaciones y conseguir que la casilla pacífica sea cada vez más atractiva.

El estado de naturaleza es una ficción. La única constante en la condición natural del ser humano es el cambio y, en consecuencia, todo lo que lo rodea. El discurso acerca de una personalidad determinada por condiciones preestablecidas al nacimiento son prejuicios y perspectivas enmarcadas en un momento histórico determinado. Lo cierto es que la condición del homo sapiens es mucho más complicada que una ecuación; recientes descubrimientos en desarrollo

cognitivo muestran un proceso racional paulatino que se moldea conforme a las circunstancias que intervienen.

La pacificación del ser humano, entonces, es posible en tanto se garantice el acceso a la educación temprana a todos por igual. Una de las principales causas de la violencia es la desigualdad producto de las disparidades del sistema de educación. Según el último resultado de las pruebas SABER (Colombia), los estudiantes de colegios privados cuentan, en promedio, con mejor calidad de educación que los adolescentes egresados de instituciones públicas. A su vez, los tres últimos resultados de la prueba PISA evidencian una amplia brecha entre los estudiantes de colegios privados (los mejores formados del país) con estudiantes de escuelas públicas extranjeras.

Cruz (1999) señala en la Revista Panamericana de Salud Pública: “los enfoques adoptados en el examen de la victimización muestran, antes que diferencias, la proximidad de las características demográficas de las víctimas y los victimarios” además agrega que: “otras variables que aparecen asociadas con la victimización por la violencia urbana, según algunos de los estudios, son el sexo, el nivel socioeconómico de la víctima o de la comunidad donde reside la víctima y la raza o grupo étnico de esta.” lo que llevaría a concluir que la violencia es una espiral que se alimenta de sus similares.

La desigualdad es una condena a la violencia. De acuerdo con ÁLVAREZ RIVADULLA (2018), coordinadora de la Maestría en Sociología de la Universidad de los Andes: “Colombia sigue sacando los primeros puestos en una región de por sí desigual con su índice de Gini de 0,517

(este índice mide la desigualdad de un país siendo 0 la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad). Si además miramos la desigualdad de renta y no de ingresos, la cifra sube. Si vemos la de posesión de la tierra, sube muchísimo más.” no sorprende que los rasgos culturales de una sociedad con profundas disparidades sea tan violento.

Las repercusiones de un proyecto de pacificación compromete los discursos políticos, económicos y sociales en igual medida. Álvarez, por ejemplo, también señala que:

La desigualdad mata (...), mata a quienes están más abajo en la distribución, dándoles menor esperanza de vida, por ejemplo. También inhibe la generación de capital humano (¿cuántos posibles médicos habrá en las regiones más pobres de Colombia?) e impide que el crecimiento les llegue a todos porque solo algunos lo acaparan. Pero, tal vez lo más interesante es que la desigualdad puede tener efectos negativos para los más privilegiados, entre ellos violencia, miedo a usar el espacio público, altísimos costos en seguridad y educación y hasta una peor salud (...). La desigualdad relativa, más que la absoluta, afecta el modo en que nos situamos y sentimos en relación a los otros. Esto es importante para pensar en la posibilidad de coaliciones redistributivas. Si entendemos que la desigualdad es un problema en sí mismo, más allá de la pobreza, y que es un problema que nos afecta a todos, podremos actuar para disminuirla.

De esta manera, situar al estado de naturaleza en condiciones pacíficas o violentas es insuficiente. Las condiciones de vida y el acceso a oportunidades conforme a sus capacidades modula al ciudadano; sus prejuicios y perspectivas se forman a partir de un marco interpretativo

construido desde edades tempranas. En un proyecto que abarca toda la vida, un descuido prolongado en el tiempo termina afectando el resultado.

Así como es un error pensar que el estado de naturaleza es inalterable, también lo es considerar a ese individuo completamente racional por el solo hecho de su condición humana. Cada individuo pertenece a un colectivo que forja su comportamiento y consciencia. El conocimiento compartido del colectivo termina siendo la consciencia de sus integrantes más imbuidos en él.

La ilusión del conocimiento, como argumentan SLOMAN, FERNBACH (2017) es una falacia que se apropia del conocimiento de los demás y piensa que es suyo. De esta manera, se considera una creencia popular como un hecho cierto. Realmente el ser humano sabe muy poco de su entorno y mucho menos del mundo en general. Las decisiones, en definitiva, son tomadas desde la aprobación grupal. HARARI (2018) en consecuencia, opina que:

la gente rara vez es consciente de su ignorancia, porque se encierra en una sala insonorizada de amigos que albergan ideas parecidas y de noticias que se confirman a sí mismas, donde sus creencias se ven reforzadas sin cesar y en pocas ocasiones se cuestionan

Ser conscientes de la manipulación directa o indirecta que ejercen las masas sobre el individuo es clave para entender la ignorancia de las decisiones humanas. Esto no quiere decir que siempre se actúe conforme a las demandas sociales, también están las reacciones emocionales. Pero, en definitiva, muy pocos juicios son racionales puesto que en su mayoría están mediados por el entorno social y las emociones.

La soberbia de la sabiduría, en este caso, entendida como un falacia, causa muerte y destrucción. Es común ver cómo debates desembocan en violencia a causa de la intolerancia y prepotencia de los ciudadanos mejor persuadidos. La gente no soporta la idea de ser ignorante y mucho menos de sentirse ingenuos, aunque, justamente la respuesta para lidiar con las aireadas discusiones políticas que ensangrientan el panorama público sea aceptar esta condición ignorante. Así pues, la sabiduría a la que debería aspirar el sistema educativo es enseñar a reconocer la ignorancia individual y cómo administrarla. En la posteridad, la verdad (si es que existe) no hará más que complicarse y es poco probable que las capacidades del ser humano puedan abarcar el conocimiento suficiente para llegar a ella.

En este sentido, las oportunidades de pacificar la sociedad colombiana son en primera instancia proporcionales a la capacidad de igualar a la población en oportunidades, especialmente en educación calificada. Personas con pensamiento crítico, habilidades de comunicación, cultura cooperativa e innovadora crean ciudadanos humildes, empáticos y sobre todo, pacíficos.

¿Cómo enfrentar entonces el dilema que implica la justicia en una sociedad tan desigual como la colombiana? Desde la época de Confucio, Sun Tzu, Platón y Aristóteles se ha reflexionado sobre la política como protectora de los valores de justicia, paz, igualdad o libertad. La descripción de sociedades utópicas que se hacían entonces, sin embargo, no incluían mujeres, negros, esclavos, y en algunos casos, ni siquiera a extranjeros. Los consejos del Arte de la Guerra (Siglo VI a.C), por ejemplo, contemplaba la justicia, decencia y moderación en términos bélicos, de ser necesario.

Siglos después, se transforma nuevamente la interpretación de justicia y paz con la difusión de las religiones monoteístas. El Corán, verbigracia, presenta por primera vez el término de la Guerra Justa (Yihad): un deber religioso que surge como último recurso en defensa de una justa causa (islámica) dictada por la autoridad adecuada. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, expuso también el concepto de vida buena y virtuosa en tanto haya justicia por el Gobierno. La *ius ad bellum* (derecho a la guerra), según Aquino, proviene del don de la razón que ha concedido Dios al ser humano que guía su comportamiento moral y ético.

Gobernar con justicia se convierte entonces en el punto nodal de la teología cristiana, pero ¿cómo el Estado puede ser justo? según Aquino, lo deciden las leyes como un ordenamiento de la razón para el bien común, promulgado por alguien que se ocupa de la comunidad. Si bien advierte que estas normas deben basarse en las leyes de la razón y no en la teológica, la interpretación está mediada por la ley que el cristianismo entiende como natural.

No fue sino hasta el fin de la Edad Media en Europa que se presentaron ideas revolucionarias en ciencia, economía y, sobre todo en política, que alteraría nuevamente los valores en lo que más adelante sería Occidente. Rousseau y Hobbes, por su parte, pusieron de manifiesto el contrato social por medio del cual se ordenaba la sociedad en un necesario pacto. Ambos alegaban un estado de naturaleza que justificó la reinterpretación de justicia y paz.

El orden social contractualista duró hasta la siguiente revolución política (como era de esperarse), el mundo pre-industrial se encontró por primera vez con una disyuntiva entre

burgueses que monopolizaban los sistemas de producción y proletariado que contribuían más a la economía de lo que recibían a cambio. La valoración entre el bien y mal, ahora propuesta por Jeremy Bentham, hacía una lectura del bien como un mal necesario. Si toda ley es una restricción a la libertad y la felicidad de las personas, los gobiernos solo pueden elegir entre diversos males que causen la mayor felicidad al mayor número de personas. Sin embargo, reducir la vida a un cálculo aritmético sería injusto si la felicidad de las mayorías socaba la de unos pocos.

La publicación del Manifiesto Comunista (Marx y Engels), en 1848 volvería a transformar la interpretación de justicia y paz en todo el mundo. Considera la historia de la humanidad como una lucha de clases. La Revolución Industrial reconfiguró el orden social, originó una nueva clase política y exacerbó las desigualdades. Movimientos reformistas ocuparon el panorama político desde México hasta China, y la rivalidad entre las nuevas creencias marcarían el ritmo político, económico y social del tiempo venidero.

En simultáneo, empezaron a surgir también otras interpretaciones de la justicia. John Stuart Mill, por ejemplo, convencido que el proyecto social era viable en tanto se defendieran los derechos individuales, presentó una alternativa a la colectividad socialista naciente en el nuevo mundo. Del mismo modo, empezó el surgimiento de alternativas políticas que respondieran a las necesidades sociales industriales, en las que se encuentra entre otras el fascismo.

En los años siguientes a las guerras mundiales, vuelve a ocurrir una reinterpretación del orden político a causa de las nuevas realidades. Participaron personajes como Friedrich Hayek, que en su momento, introdujo la necesidad de ponerle límites al gobierno. Su única función debía ser la

vigilancia del cumplimiento de la ley con la menor intervención posible. También critica la idea de calificar de justo o injusto al mercado que al ser un juego en el que no tiene cabida dichas calificaciones es superfluo analizarlas; lo único que realmente es necesario es una red de seguridad básica que “proteja de los actos desesperados de los necesitados”.

En este sentido, la interpretación de justicia dividió el mundo en fascismo, comunismo y capitalismo liberal. Todas enarbolaban una verdad única por medio de la cual alcanzarían la paz e igualdad, pero en diferentes términos. Primero cayó el fascismo, no porque el proyecto fuera insostenible sino por ausencia de tacto militar junto a habilidades diplomáticas. Años después, el comunismo se derrumbó estrepitosamente al no adaptarse a las dinámicas del mundo tecnológico; el procesamiento de datos centralizado fue incapaz de administrar el flujo de información que surge con rapidez. Por último, el proyecto capitalista se frustra al no responder a las exigencias sociales contemporáneas, si bien ha logrado administrar el flujo de información del mundo globalizado, se encuentra avasallado por él. Hasta ahora, ningún sistema ha logrado procesar los datos con la misma rapidez con la que circulan, tanto gobiernos como ciudadanos suelen distraerse en temas secundarios en lugar de centrar su atención en los debates centrales.

Ahora, la Revolución Tecnológica conlleva una nueva realidad social. Las antiguas divisiones políticas pertenecen a un mundo industrial lejano, de frágil conectividad. Los desafíos que plantea, por citar algunos, la inteligencia artificial (IA), la biotecnología y automatización de procesos transforma el debate político. El cambio persiste en la historia del homo sapiens y tanto el concepto de paz como de justicia se adaptan a él.

El análisis del entorno ahora va más allá de la comunidad, la ciudad o el país; el mundo se encuentra conectado por redes invisibles que complejizan cada vez más las relaciones sociales. En realidad, el ser humano sabe cada vez menos de su contexto, los ingredientes de sus alimentos, materiales de sus edificaciones y la procedencia de sus ideas son conceptos abstractos que superan sus capacidades.

Un mundo oscuro donde se desconocen las relaciones de causa y efecto complica la interpretación de justicia y paz. La disrupción entre el actuar moral y el desconocimiento que desarrolla Yuval Noah Harari (2018) en 21 Lecciones para el Siglo XXI contempla que:

Podemos intentar eludir el problema adoptando una “moral de intenciones”. Lo que es importante es lo que pretendo, no lo que hago en realidad o el resultado de lo que hago. Sin embargo, en un mundo donde todo está interconectado, el imperativo moral supremo se convierte en el imperativo de saber. Los mayores crímenes de la historia moderna fueron el resultado no solo del odio y la codicia, sino mucho más de la ignorancia e indiferencia.

Las necesidades más desafiantes plantean un reto tanto en Colombia, como en las Américas y el mundo entero. La deforestación de la Amazonía, la marginalidad de la Colombia profunda o la malnutrición y la falta de educación de la población involucra a toda la comunidad internacional. Si bien el mayor impacto del conflicto armado en Colombia es regional, es difícil no encontrar consecuencias en otras zonas del mundo. La migración, por ejemplo, ha representado para el país una fuga de cerebros determinantes para el desarrollo sostenible y una obligación de refugio en otras Naciones.

Por otro lado, el reto que representan las noticias falsas, las interpretaciones sesgadas y conspirativas, los modelos infundados o dogmas supersticiosos es interminable. El mundo asiste a una transformación histórica de dimensiones universales que produce confusión y asombro. A falta de un nuevo relato que reemplace el discurso anticuado de la justicia y paz como se conoce hasta ahora, se hacen esfuerzos por tergiversar la realidad.

Las ficciones hacen parte de la historia y edifican la realidad humana, han sido útiles para agrupar cientos y miles de personas en un relato común y trabajar conjuntamente en objetivos concretos. De hecho, la capacidad de crear ficciones y cooperar entre muchas personas ha hecho que la especie domine el ecosistema. Sin embargo, también ha habido innumerables momentos en donde se desequilibra el vínculo entre realidad – ficción y se desata el caos, “una mentira contada una vez sigue siendo una mentira, pero contada en mil veces se convierte en una verdad” afirmaba acertadamente Joseph Goebbels, responsable de la propaganda nazi.

Saber diferenciar entre una convención humana y un concepto inalienable a la naturaleza era importante en el siglo XX, pero ahora es fundamental. Las redes sociales actuales facilitan la libre circulación de información sin importar su veracidad. La importancia de infundir el pensamiento crítico no solo permite entender el cambio como el verdadero proceso natural del homo sapiens sino lidiar con la desinformación.

Los seres humanos mutan constantemente en características e ideas diferentes, los récords mundiales en competencias humanas, por ejemplo, son superados cada año por la facilidad de

adaptación de los deportistas. Asimismo, las leyes que en 1940 fueron pertinentes y eficaces hoy en día suelen ser inocuas y absurdas. ¿Cómo adaptarse entonces al cambio permanente?

El ciudadano, en el ejercicio de sus derechos, desempeña un rol de control y vigilancia en la sociedad. Tal y como lo demandan sus obligaciones frente a la comunidad, la verificación de la información y la cautela con las fuentes de datos es un compromiso ineludible. El tiempo se debe invertir, en parte, en identificar los prejuicios y pronunciarse contra ellos, Harari (2018) anota en consecuencia que “el silencio no es neutralidad: es apoyar el statu quo”.

El Acuerdo de Paz (2016) presenta este desafío. El nuevo sistema de justicia y paz no responde a las necesidades de la Colombia del siglo pasado, por el contrario recoge las lecciones aprendidas en el esfuerzo por adaptarse al mundo tanto del Gobierno como de la comunidad en general. El problema no es el valor de la justicia y paz sino de su implementación. Para comprender el cambio de la justicia es indispensable entender la evolución de la sociedad en donde se piensa aplicar y la pertinencia de una nueva interpretación.

¿Es posible que todos los miembros de una sociedad crean en la misma interpretación? Probablemente no, pretenderlo sería desconocer el principio de igualdad. No todos tienen las mismas capacidades ni oportunidades. Sin embargo, la desigualdad no exime de la responsabilidad ciudadana de esforzarse por conocer la versión más veraz de los hechos, constatar las fuentes de consulta y combatir de manera pacífica la desinformación. Cualquier alternativa en estos términos es más viable que el más elaborado proyecto belicista.

CONCLUSIONES

Colombia fue el primer país del hemisferio en negociar la paz con un grupo subversivo y, al mismo tiempo, es el único territorio latinoamericano donde las guerrillas aún gobiernan vastos territorios. El dilema entre justicia y paz ha estado presente desde principios de la República. Sin embargo, nunca había sido tan necesario saber abordar y resolver estos problemas sociales como ahora.

El acuerdo de paz del 2016 retoma la necesidad de reparar los tejidos sociales dañados con la guerra civil. La presente investigación plantea, en primera medida, el protagonismo de la educación en el proceso de reconciliación e implementación de los acuerdos de la Habana. En suma, un sistema de enseñanza basado en las capacidades y habilidades de cada estudiante en lugar del poder adquisitivo, podría garantizar una sociedad más justa y pacífica. A pesar de ser una necesidad indispensable para la construcción de una sociedad viable, a diario se toman decisiones gubernamentales que atrasan el progreso académico de la población en general. Es el caso de la suspensión de la cátedra de historia en los años noventa, por ejemplo. Esta medida, condenó a toda una generación de colombianos a desconocer el origen de los fenómenos políticos, económicos y sociales que los rodean. Por lo tanto, para resolver el dilema entre justicia y paz en Colombia no basta con implementar lo pactado con las Farc-EP sino intervenir la educación nacional. Para resolver un problema primero hay que entenderlo. El primer capítulo presenta las responsabilidades del ciudadano con la paz en el marco de los acuerdos de la Habana. Si bien es cierto que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que el

desarrollo moral se dé en cada uno de los habitantes, los colombianos están llamados a plantearse nuevas formas de entender la justicia.

La propuesta educativa que se propone en el primer capítulo consiste en enseñar a través de las clases de ética tanto en educación básica, secundaria y profesional una respuesta pacífica a los problemas que se puedan presentar en la vida cotidiana. Las bases que presenta Kohlberg en su teoría de desarrollo moral serían útiles para acompañar a la población en el tránsito de una sociedad violenta a una pacífica.

La ley de educación actual contempla la enseñanza de la ética como prioridad en educación básica y secundaria. Con el presente escrito se pretende formular un sustento filosófico que pueda vincular este compromiso del Estado también en la formación profesional. Además, enfocar estos esfuerzos hacia la no violencia y el desarrollo cognitivo de los ciudadanos.

En el segundo capítulo, se aborda la lectura del acuerdo de paz en relación a tratados similares. Es decir, destaca las principales diferencias y similitudes con el acuerdo de paz precedente. Líderes políticos han asegurado que tanto las condiciones como las partes de la negociación son incomparables. No obstante, ambos acuerdos responden a las demandas sociales de paz y pretenden terminar el conflicto armado con modalidades diferentes. Durante las campañas políticas del plebiscito para refrendar los acuerdos de la Habana, justamente los grupos sociales que hicieron generosas concesiones a organizaciones subversivas anteriores rechazaban las negociaciones. Por lo anterior, el dilema entre justicia y paz que plantean los acuerdos del 2016

no solo deben ser analizados con las herramientas políticas y filosóficas pertinentes, sino también, con una perspectiva histórica de los hechos.

Por último, El último capítulo aborda los desafíos colectivos en resolver el dilema entre justicia y paz en el postconflicto. El valor de la justicia y la paz debe ser analizado a partir del contexto correspondiente. En particular, el cambio constante de la condición humana plantea dilemas que deben resolverse. La incapacidad de enfrentar la disyuntiva entre la justicia y paz se ha traducido en violencia y desigualdad por lo que es indispensable incluir en el postconflicto los preceptos expuestos en esta investigación.

En conclusión, el dilema moral que plantea el postconflicto colombiano comprende varias etapas y en cada uno de ellas actores diferentes. Si bien todas las partes involucradas deben trabajar en conjunto para encontrar una respuesta que satisfaga a todos, los compromisos con la paz son individuales en tanto persona, Estado y sociedad. Para que haya ausencia de violencia el ciudadano necesita contar con las herramientas cognitivas que le permitan resolver sus problemas y diferencias con otros de una manera pacífica; en simultáneo, el Estado necesita garantizar las condiciones formales (mecanismos eficientes que garanticen la administración de justicia) y sustanciales (estrategias para adaptarse a los constantes cambios que exige la sociedad) para que la ausencia de violencia sea estable y duradera. Una vez se superen estas etapas de pacificación (individual y administrativa) el trabajo tendrá que ser en conjunto. El dilema entre justicia y paz se resuelve en comunidad. Ahora, ¿Cuánto tardará la sociedad colombiana en unir esfuerzos para superar los desafíos colectivos que se avecinan?

REFERENCIAS

1. ALEXY, R. (1993). Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
2. ÁLVAREZ LONDOÑO, A. (2020). Historia del Derecho Internacional Público. Bogotá: Editorial Universidad Pontificia Javeriana.
3. ÁLVAREZ RIVADULLA, M.J. (2018). ¿Por qué preocuparnos por la desigualdad en Colombia? Universidad de los Andes de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales. Recuperado de <https://uniandes.edu.co/es/noticias/desarrollo-regional/por-que-preocuparnos-por-la-desigualdad-en-colombia>
4. BARRA ALMAGÍA, E. (1987) Revista Latinoamericana de Psicología. El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg, 19 (1). 7-18. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf>
5. BOTERO BERNAL, A. (2012). Filosofía del Derecho. Medellín: Señal Ediciones S.A.
6. BUCKINGHAM, W. et al. (2011) El Libro de la Filosofía,. (Traducido al español de The Book of Philosophy). Londres: Dorling Kindersley Ltda.
7. CALDERÓN ROCHA, P. (2009) Revista Paz y Conflictos. Teoría de Conflictos de Johan Galtung. 2 (1), 60 – 81. Recuperado de http://www.ugr.es/~revpaz/numeros/rpc_n2_2009_completo.pdf
8. CASTRES, P. (2018) Revista Livre. La Arqueología de la Violencia, traducción de Ida Vitale, Revista Livre, 2018.
9. Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2019) ¿Qué es la justicia transicional? Recuperado de <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

10. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas.
(2016) La Matriz de la Desigualdad Social en América Latina. Recuperado de
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf
11. Corte Constitucional de Colombia. (1 de junio de 2016). Plebiscito por la Paz 26-05-2016 tarde. [Archivo de Video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=4zmELHqzh2g&feature=emb_title
12. Corte Constitucional de Colombia. (1 de marzo del 2018) Sentencia C-007/18. (MP Diana Fajardo Rivera)
13. Corte Constitucional de Colombia. (7 de febrero del 2002) Sentencia C-067/02. (MP Marco Gerardo Monroy Cabra)
14. CORTINA ORTS, A. (1998). 10 Palabras Clave en Filosofía Política. Pamplona, España: Editorial Verbo Divino.
15. CRUZ, J.M. (1999). Revista Panamericana de Salud Pública. La victimización por violencia urbana: niveles y factores asociados en ciudades de América Latina y España. 5 (1). 259 – 267. Recuperado de <https://scielosp.org/pdf/rpsp/1999.v5n4-5/259-267/es>
16. DACOME, R. et al. (2013). El Libro de la Política. Londres: Dorling Kindersley Ltda.
- 17.** DE LA CALLE, H. (2019) Revelaciones al Final de una Guerra. Bogotá: Pinguin Random House Editorial.
18. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Recuperado de
<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf>

19. FEIJÓO SÁNCHEZ, B. (2017). Revista Peruana de Ciencias Penales. Las Teorías Clásicas de la Pena. 11 (1). 331 – 369.
20. FRANKOPAN, P. (2016). El Corazón del Mundo: Una Nueva Historia Universal. (Traducción al español de The Silk Roads: A new History of the World). Barcelona: Editorial Planeta S.A.
21. GILLIGAN, C. (1985). La Moral y la Teoría. Psicología del desarrollo femenino. México: Fondo de la Cultura Económica.
22. HARARI, Y. N. (2020). 21 Lecciones para el Siglo XXI. (Traducción al español de 21 Lessons for the 21st Century) Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
23. HARARI, Y.N. (2019). De Animales a Dioses: Breve Historia de la humanidad. (Traducción al español de Sapiens: A Brief History of Humankind) Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
24. HARARI, Y.N. (2019). Homo Deus: Breve Historia del Mañana. (Traducción al español de Homo Deus: A Brief History of Tomorrow). Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
25. LINDE NAVAS, A. (2009) Revista Praxis Filosófica. La educación Moral según Lawrence Kohlberg: una utopía realizable. 28 (1). 7 – 18. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf>
26. MEDINA-VICENT, M. (2016) Revista Internacional de Filosofía. La Ética del Cuidado y Carol Gilligan: Una Crítica a la Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg para la Definición de un Nivel Moral Postconvencional Contextualista. 16 (1), 83 – 98. Recuperado de https://proyectoscio.ucv.es/wp-content/uploads/2016/05/06-Medina_Vicent.pdf

27. MELO, J.O. (2007). Historia Mínima de Colombia. Bogotá: Turner Publicaciones.
28. MESA ARANGO, A. (2008). Revista Unipru/versidad. La Formación Ciudadana en Colombia. 8 (3). Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9541/1/ArangoAlejandro_2008_FormacionCiudadanaColombia.pdf
29. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2016) Cartilla pedagógica: ABC del Acuerdo. 9 – 40. Recuperado de <https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf>
30. MORENO, N.P. (2017). Operación Marquetalia, 53 años de un mito fundacional. Diario El Espectador. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/operacion-marquetalia-53-anos-de-un-mito-fundacional-articulo-695965>
31. PARISEL, E. (2011). The Filter Bubble: What The Internet is Hidden From You. New York City: The Penguin Press.
32. PECAUT, D. (1997). Revista Desarrollo Económico. Presente, Pasado y Futuro de la Violencia en Colombia. 36 (144). pp. 891-930. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/3467131?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
33. PINKER, S. (2011). Los Ángeles que Llevamos Dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones. (Traducido al español de The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined) Bogotá: Editorial Paidós.
34. SANTOS, J.M. (2019). La Batalla por la Paz. Bogotá: Editorial Planeta.
35. SLOMAN, S., FERNBACH, P. (2017). The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone. New York City: Penguin Random House Editorial.

36. TIRADO MEJÍA, MELO y BEJARANO (1989). Enciclopedia: Nueva Historia de Colombia: Educación, ciencias, mujer y vida diaria. Bogotá: Editorial Planeta.
37. UPRIMNY, R., SÁNCHEZ, L.M., SÁNCHEZ, N.C. (2014), Justicia para la Paz: Crímenes Atroces, Derecho a la Justicia y Paz Negociada. 1ª ed. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
38. URIBE, D. (2018). Brújula Para el Mundo Contemporáneo: Una Guía Para Entender el Siglo XXI. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.